INFILTRADOS

ESPIONAJE MILITAR EN DEMOCRACIA

SAMUEL BLIXEN

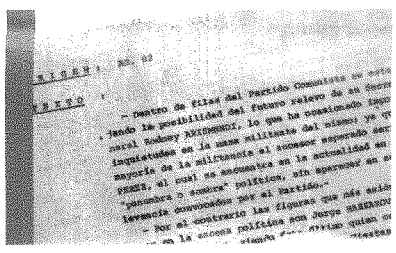
PUBLICACIÓN ESPECIAL **Brecha**

ÍNDICE

4-5 / La aparición del archivo del coronel Castiglioni.

6-7 / Archivo Castiglioni revela espionaje hasta 2009 / Secreto a voces.

8-9 / Los documentos que prueban el espionaje militar en democracia.



10-11 / La infiltración en el Partido Nacional.

11 / Un infiltrado en los encuentros entre wilsonistas y militares.

12-13-14 / Espionaje de la inteligencia militar en democracia. / De pura raza. / Diego el telefonista, la Momia y un agente doble.

15-16 / La infiltración en el MLN y el Frente Juvenil.

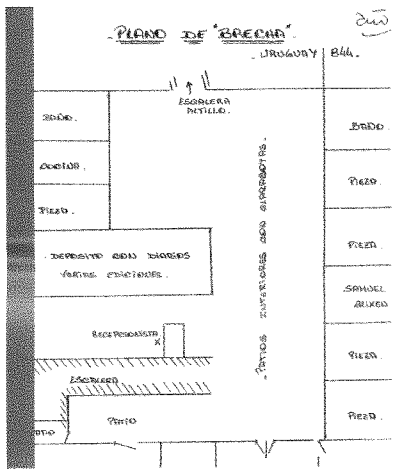
17 / Objetivo *Mate Amargo*.

18-19 / Una batalla entre la CIA y la inteligencia por el espionaje del Partido Comunista / Una confesión.

20 / Una profusa infiltración en variados sindicatos.

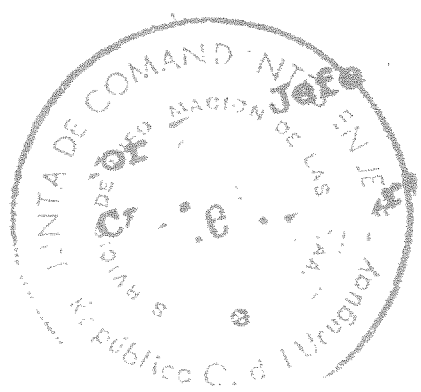
21 / La vigilancia de diplomáticos cubanos.

22-23 / El espía que entró en la **Brecha** / "Simpatizantes y sediciosos".



24-25 / Los jefes del espionaje militar.

26-27 / Sobornos policiales para vigilar a los vascos en 1989.



INTRODUCCIÓN

Las reacciones fueron variadas, insólitas y contradictorias: hubo escepticismo, temor, estupor, rechazo, pero finalmente la Cámara de Diputados instaló a fines de 2016 una comisión investigadora. Sin embargo, la información divulgada sobre espionaje continuado en democracia contra partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, religiosas y judiciales, cuyos objetivos estaban, por cierto, muy lejos de la defensa de la integridad nacional y el interés estratégico del país –y muy cerca de un intento de control fascista de la vida democrática–, estaba disponible desde febrero de 2006, cuando la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, incautó un archivo de microfilmaciones en un ropero metálico en las dependencias de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Se trataba de 1.144 rollos –unos 45 mil metros de película de 16 milímetros– que fueron escaneados a lo largo de dos años en formato electrónico Tiff. El conjunto del material no fue nunca analizado sistemáticamente, porque se requería para ello un programa de cruzamiento de datos que el ministerio nunca aportó; y el contrato de quienes estaban realizando el trabajo no fue renovado.

La copia en 51 DVD (se realizaron tres juegos, además de otro soporte en dos discos duros) fue motivo de un persistente enigma, porque en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiente de la Presidencia, no se supo dar noticia de su paradero cuando el acceso a ese archivo era reclamado por organizaciones de derechos humanos y por abogados. Los jueces penales no tuvieron acceso a las copias y por tanto no tenían forma de saber qué información había allí que sirviera para la prosecución de las causas. El Archivo General de la Nación, donde están los originales y un juego de DVD, mantuvo un criterio extremadamente restrictivo de acceso y negó entregar una copia digitalizada al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia designado por el presidente Tabaré Vázquez. Durante diez años esa información fue deliberadamente ignorada. Recién en diciembre de 2016 el Grupo de Trabajo accedió a los DVD entregados por orden del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y las nuevas autoridades de la Secretaría para el Pasado Reciente dispusieron el acceso a los materiales para periodistas y activistas de derechos humanos.

De los 1.144 rollos hay decenas de ellos que se refieren a "Informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (DGID)", y que van desde 1986 hasta 2005. Allí está la información que ahora sacude al es-

tamento político, al revelar que oficiales de la inteligencia militar intervenían teléfonos, hacían allanamientos, ordenaban seguimientos y reclutaban informantes para infiltrar organismos públicos, partidos políticos y sindicatos, y eventualmente realizar chantajes. **Brecha** *obtuvo unos pocos rollos sobre informantes militares; la divulgación de las historias que surgían de ese material y el análisis de algunos elementos sobre criterios y funcionamiento bastaron para confirmar lo que los políticos y funcionarios no querían conocer: que la inteligencia militar aplicaba los mismos objetivos y criterios de funcionamiento de la dictadura, y que el tránsito a la democracia sólo mereció cambios de forma en la estructura a efectos de consolidar su autonomía y eludir cualquier control del poder civil.*

Por cierto, los sucesivos gobiernos (hasta la designación de la doctora Berrutti) no evidenciaron ninguna iniciativa de control, por más que hubo indicios de hacia dónde apuntaba la inteligencia y qué tipo de espionaje se realizaba. El escándalo del secuestro y desaparición del bioquímico chileno Eugenio Berríos puso en evidencia operativos clandestinos conjuntos de las inteligencias chilena y uruguaya, con una profusa comisión de delitos que culminó con la ejecución sumaria del ex agente de la DINA y, probablemente, el asesinato de una estudiante, testigo incómoda; los dos principales responsables del secuestro de Berríos, Tomás Casella y Wellington Sarli, eran, por esas épocas, responsables de las estructuras de espionaje en el Departamento III y en la Compañía de Contrainformación. Muy poco después se confirmó la siembra de micrófonos para espiar al ministro de Defensa Nacional Mariano Brito; y finalmente el espionaje llegó al Edificio Libertad, para escuchar las conversaciones del presidente Jorge Batlle y su prosecretario, Leonardo Costa. Esas interferencias telefónicas, en la segunda mitad del año 2002, en plena crisis bancaria, alcanzaron también a un diputado colorado, lo que sugería que el espionaje llegaba hasta el Parlamento. Más recientemente, en medio de un cuestionamiento a la Suprema Corte de Justicia, se divulgaron grabaciones clandestinas de una conversación telefónica entre un juez de Canelones y un fiscal en las que se vertían apreciaciones muy duras sobre los miembros de la Corte.

Los documentos almacenados en los rollos revelan que la inteligencia militar tenía como objetivo las escuchas telefónicas de políticos y de diplomáticos, y que un interés especial despertaban las computadoras, para llegar a las cuales era necesario previamente contar con reclutas que facilitaran el acceso de los técnicos militares. El espionaje en democracia no se detuvo ante la ley y fue indiferente a la comisión de delitos, algunos de los cuales quedaron prolijamente descritos en los documentos del Departamento III. Así, a efectos de ubicar un apartamento habitado por argentinos (sospechosos por el mero hecho de haber ingresado al país en los días posteriores a la toma del cuartel de La Tablada), oficiales de inteligencia, haciéndose pasar por funcionarios de OSE, inspeccionaron más de 20 apartamentos de un complejo habitacional, interfirieron bornes telefónicos sin autorización judicial, efectuaron seguimientos y vigilancias de personas militantes de partidos políticos, recopilaron e introdujeron informantes en embajadas extranjeras. El reclutamiento de espías infiltrados y de informantes en organismos estatales y estructuras políticas no descartaba ningún procedimiento: el uso de información confidencial o íntima, la explotación de enconos y rencores, la presión en función de "secretos" familiares o antecedentes policiales, y el chantaje, como ocurrió con prisioneros políticos que habían colaborado con sus captores pero no lo habían admitido. El dinero, sin embargo, el pago de sueldos por la delación, parece haber sido el resorte más efectivo, aun en los casos en que existía afinidad ideológica.

Que se sepa, no hay ningún capítulo en la Unidad Ejecutora 003 (Dirección Nacional de Inteligencia del Estado) del inciso 03 del presupuesto nacional (Ministerio de Defensa) que detalle el gasto de las actividades de inteligencia, los salarios dedicados al personal de espionaje, militares o civiles, las partidas para informantes, el alquiler de locales operativos, el uso de vehículos, el gasto en combustible, en papelería, en material fotográfico y en la tecnología de interceptación, amén de los sueldos de las secretarias. Ningún controlador del gasto, parlamentario o ministerial, sabe cuál es el salario de la delación, y si ese salario es generoso o mezquino, si es aleatorio o sujeto a un criterio contable, y quién lo fija. A estar por el ejército de espías que controlaban los manipuladores, el gasto del espionaje era considerable, además de secreto. La disponibilidad de recursos sin contralor es una de las razones que explican la autonomía; otra razón es el poder real que deriva del manejo de información, poder que se diluye si se comparte. Hay documentos referidos a los hábitos sexuales de familiares de personalidades o a los vínculos de amistades "indeseables" de esos familiares, así como hay documentos que detallan operaciones comerciales de empresas, y listas de sus propietarios que están resguardadas por el secreto administrativo y registral. La infidelidad, obviamente, era un elemento de información preciado.

Hay quien sostiene que es mejor ignorar ese volumen de información obtenida mediante espionaje y abstenerse de cualquier investigación, sin tener en cuenta que esa información es desconocida para todos excepto para quienes la recolectaron, es decir, estructuras militares institucionales que no explican por qué espiaron a quienes espiaron ni qué hicieron con el fruto de ese espionaje. Será imposible controlar la actividad de inteligencia militar (y policial) si no se averigua qué métodos se utilizaron, qué criterios predominaron, qué recursos se destinaron y de dónde salieron esos recursos.

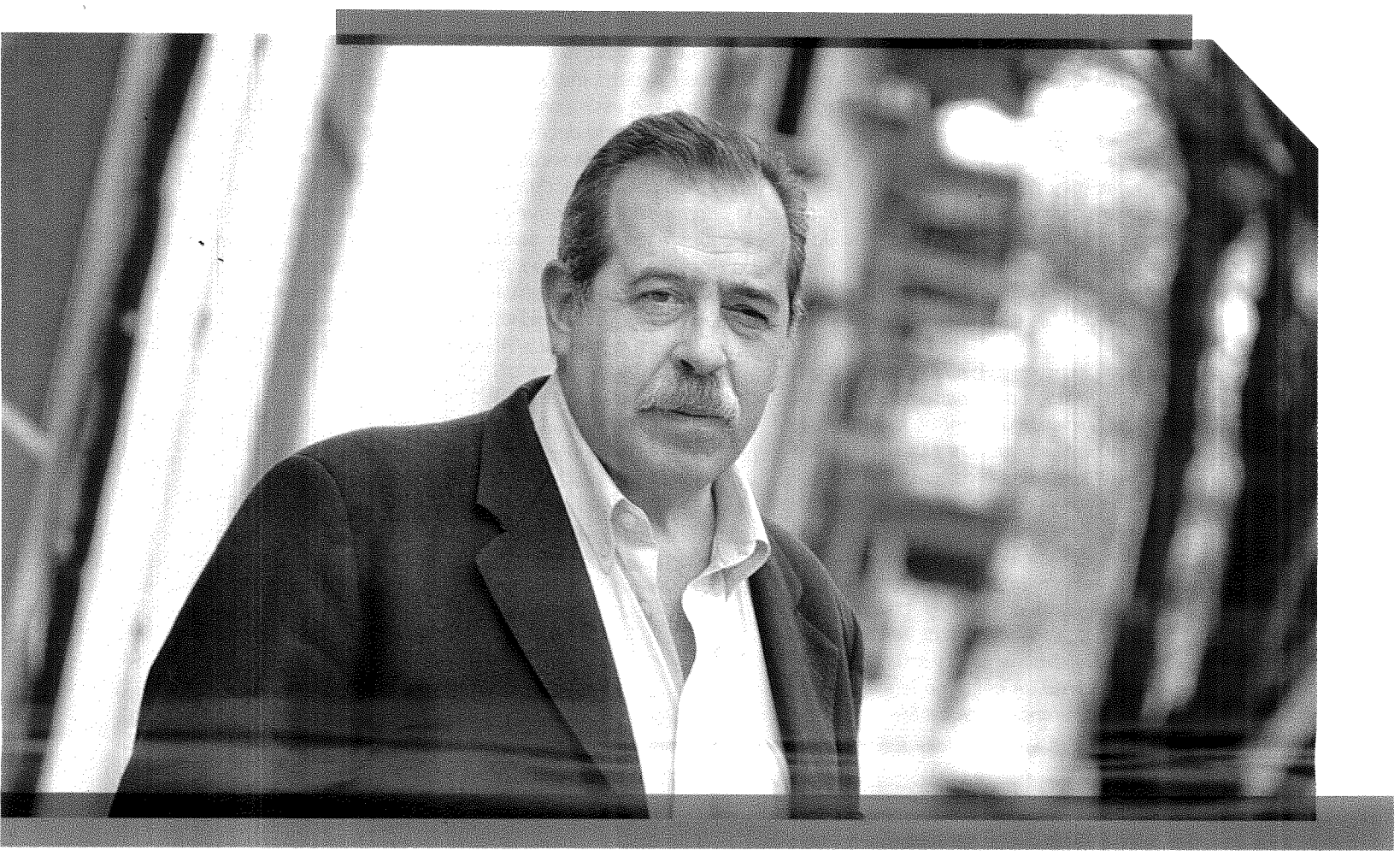
Esta publicación de **Brecha** *pretende dar un panorama general del espionaje militar en democracia, a través de los casos documentados en los rollos incautados. La oportunidad de acceder a esa documentación fue una derivación de la denuncia de* **Brecha** *sobre el contenido del archivo incautado en el domicilio del coronel retirado Elmar Castiglioni. Este archivo fue alimentado con documentos extraídos de los organismos de inteligencia, tanto militares como policiales, con objetivos que no han podido todavía ser confirmados.*

A través de esas historias que surgen de los rollos oficiales queda al descubierto la obsesión por controlar la vida cotidiana e incidir desde las sombras, sin asumir la responsabilidad, en procesos que se desarrollan en la sociedad. La mayoría de los trabajos fueron publicados en las ediciones habituales del semanario y contribuyen a tomar conciencia de ese fenómeno perverso que es el espionaje institucional, que, a juzgar por lo que surge del llamado "archivo Berrutti", en modo alguno es necesario y justificado. Si existe otro tipo de espionaje que pueda legitimarse, ese no aparece en estos documentos que, es imprescindible reiterar, son oficiales. Quizás la investigación parlamentaria logre ubicar otros archivos en los que se dé cuenta de la derivación operativa del trabajo de infiltración de los informantes, la acción concreta de otras estructuras militares que usaron los informes de los espías como insumos para lograr otros objetivos.

Foto: Andrea Lopez

Samuel Blixen
Febrero de 2017

ANTECEDENTE



Coronel Castiglioni. Foto: Diego Batiste / EL OBSERVADOR.

LA APARICIÓN DEL ARCHIVO DEL CORONEL CASTIGLIONI

ALTA TENSIÓN

No hubo que revolver mucho, el viernes 2 de octubre de 2015, cuando la jueza Beatriz Larrieu, el fiscal Carlos Negro y un grupo de policías especializados iniciaron el allanamiento del domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni en busca de un archivo militar oculto. Entre las primeras cosas que se encontraron había dos abultadas carpetas grises, a modo de expedientes rotulados a mano. *"Fernández Huidobro"*, decían con trazos gruesos. Por alguna razón, fácil de imaginar, el ex oficial de inteligencia, ex director del CALEN, había recopilado una considerable información sobre el ministro de Defensa Nacional, cuyo contenido, seguramente, fue alimentado con los documentos referidos al ex tupamaro que estaban en el archivo militar incautado en ese allanamiento. Después, en las ocho horas que duró el procedimiento judicial, los magistrados ubicaron decenas de cajas con miles de hojas impresas que corresponden, verosímilmente, al archivo microfilmado del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) cuya versión "depurada" fue ubicada en 2008 por la entonces ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti. A vuelo de pájaro, los magistrados confirmaron que algunos de los documentos incautados eran los originales de las microfilmaciones. Con cierta ingenuidad, la dueña de casa, viuda del coronel, quiso restar importancia al hallazgo. *"Mi marido tenía toda la información en su cabeza. Estos papeles no son nada, estuve a punto de quemarlos."*

Castiglioni era depositario de un archivo, uno de los tantos de origen militar, con material sensible

El coronel Elmar Castiglioni era un hombre temido en las Fuerzas Armadas. El temor se originaba en la voluminosa información que manejaba, secreta o reservada, tanto de la época de la dictadura como de períodos más recientes. Por cuenta de otros, o estimulado por otros, Castiglioni era depositario de un archivo –uno de los tantos de origen militar, aún no ubicados– con material sensible. Pero, además, el temor surgía de la manera en que el coronel hacía uso de esa información, para presionar, para generar situaciones, para operar políticamente, para crear coyunturas en su propio beneficio o del grupo con el que mantenía afinidades, tanto en la organización Foro Libertad y Concordia como en la cárcel de Domingo Arena, donde están recluidos algunos de los más notorios oficiales del SID y el OCOA. La existencia de las carpetas con información sobre el ministro de Defensa podría confirmar el montaje de uno de esos operativos políticos. La incógnita se despejará cuando la jueza Larrieu y el fiscal Negro analicen su contenido, pero en todo caso revela que esos "juegos de inteligencia" pueden tener como objetivo a los más altos funcionarios del gobierno.

El rumor, al menos en el ámbito del Ejército, de que el coronel Castiglioni ocultaba información de archivos militares era algo más que una simple presunción. Esos insistentes rumores fluyeron hacia el despacho de la ministra Be-

rrutti, en el momento en que se realizaban las consultas con los mandos superiores para impulsar una reestructura de los servicios de inteligencia del Estado. Básicamente, la idea consistía en reducir de 250 a 100 los efectivos de inteligencia, de los cuales 80 serían profesionales, preferentemente de nivel terciario, tanto militares como civiles, y los 20 restantes personal militar operativo. Para entonces, dos asistentes de Berrutti impulsaban la reestructura, y otros dos habían sido contratados para la tarea de digitalizar los documentos microfilmados que la ministra había ubicado en las dependencias de inteligencia que funcionaban en el antiguo cuartel del Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR).

Una de las primeras tareas de esa nueva estructura incipiente fue determinar el grado de veracidad de aquellos rumores que daban cuenta de la ubicación de uno de los archivos escondidos. La doctora Berrutti, consultada el lunes 5 por *La Diaria*, explicó que una tarea prioritaria de su gestión era ubicar la parte que faltaba del archivo del ex CGIOR. Dijo que la información apuntaba a un coronel, pero que ella no sabía quién era. *"No era tan fácil"*, explicó a *La Diaria*. Sin embargo confirmó que el contenido de los documentos incautados el viernes 2 *"arrojará luz sobre todo el proceso de integración al Plan Cóndor"* y sobre las *"situaciones que derivaron en la muerte o desaparición de ciudadanos del país"*.

Lo que la ex ministra llama *"el faltante"* de las microfilmaciones es, precisamente, toda la documentación que se refiere a las actuaciones de los militares y los informes sobre los operativos que derivaron en detenciones, muertes y desapariciones. Además de los "huecos" y "saltos" que evidenciaban las microfilmaciones, un indicio de que el archivo había sido "depurado" es precisamente la comprobación de que no hay ningún documento que involucre directamente a los oficiales actuantes o a los superiores que ordenaron dichos operativos.

En el despacho de la ministra se acumularon indicios sobre la identidad del coronel que supuestamente había "robado" lo que faltaba del archivo. Un grupo de oficiales tomó a su cargo el trabajo de contrainteligencia y comenzó a realizar seguimientos al coronel Castiglioni y a montar una vigilancia de su domicilio de la calle Luis Alberto de Herrera. Castiglioni detectó esa vigilancia y realizó una denuncia judicial.

En enero de 2008 estaba todo pronto para realizar un allanamiento, a cargo de dos coroneles. El general Rosales, comandante del Ejército, estaba al tanto del operativo. En esas circunstancias, Azucena Berrutti renunció. *"Yo tuve que dejar el ministerio"*, dijo Berrutti a *La Diaria*, sin explicar qué eventos la obligaron a tomar esa medida imprevista. *"Hay un hecho, me fui y la cosa se paró, no pasó más nada"*, agregó. Indicó que *"para saber cuáles son las razones habría que preguntar a las personas. Incluso al actual ministro. ¿Por qué no hace nada? Porque si él hubiera querido, para él hubiera sido, pienso yo, muy sencillo. A lo mejor hay razones importantes que uno no conoce"*. Azucena Berrutti fue sustituida por el entonces subsecretario, José Bayardi. En el despacho ministerial, como confirma la ex ministra, el operativo de contrainteligencia estaba a la espera de una decisión. Bayardi optó por congelar el episodio, con lo que de alguna manera quedaron en evidencia los coroneles responsables de la investigación. *"Eran oficiales de alta graduación que se involucraron en la defensa de la institucionalidad, de los derechos humanos y de la verdad"*, comentó una fuente a **Brecha**, quien aventura que Bayardi debe de haber manejado razones políticas para tomar esa decisión. Sin embargo, Bayardi desmintió a **Brecha**, en enero pasado, cuando en un informe que dio cuenta de ese trabajo de ubicación del archivo se consignaba la negativa del entonces ministro a autorizar el allanamiento.

El ex ministro afirmó, en una carta dirigida a este semanario, que nunca tuvo conocimiento de un expediente de contrainteligencia, afirmación que contiene una porción de verdad, porque no había un expediente, aunque sí había sido debidamente informado de la situación, que prefirió ignorar. Berrutti, por su parte, lo confirma al señalar que habría que preguntar el porqué a los que vinieron después de ella. Un último intento de defender la actuación del ex ministro de la Vertiente Artiguista estuvo a cargo del ex senador Enrique Rubio, quien, después del allanamiento, escribió en Twitter: *"La verdad que si no aportan algo probatorio distinto a lo afirmado por Bayardi, otro gallo cantará ¡y no va a gustar!"*, lo que parece una amenaza en la dirección de Berrutti.

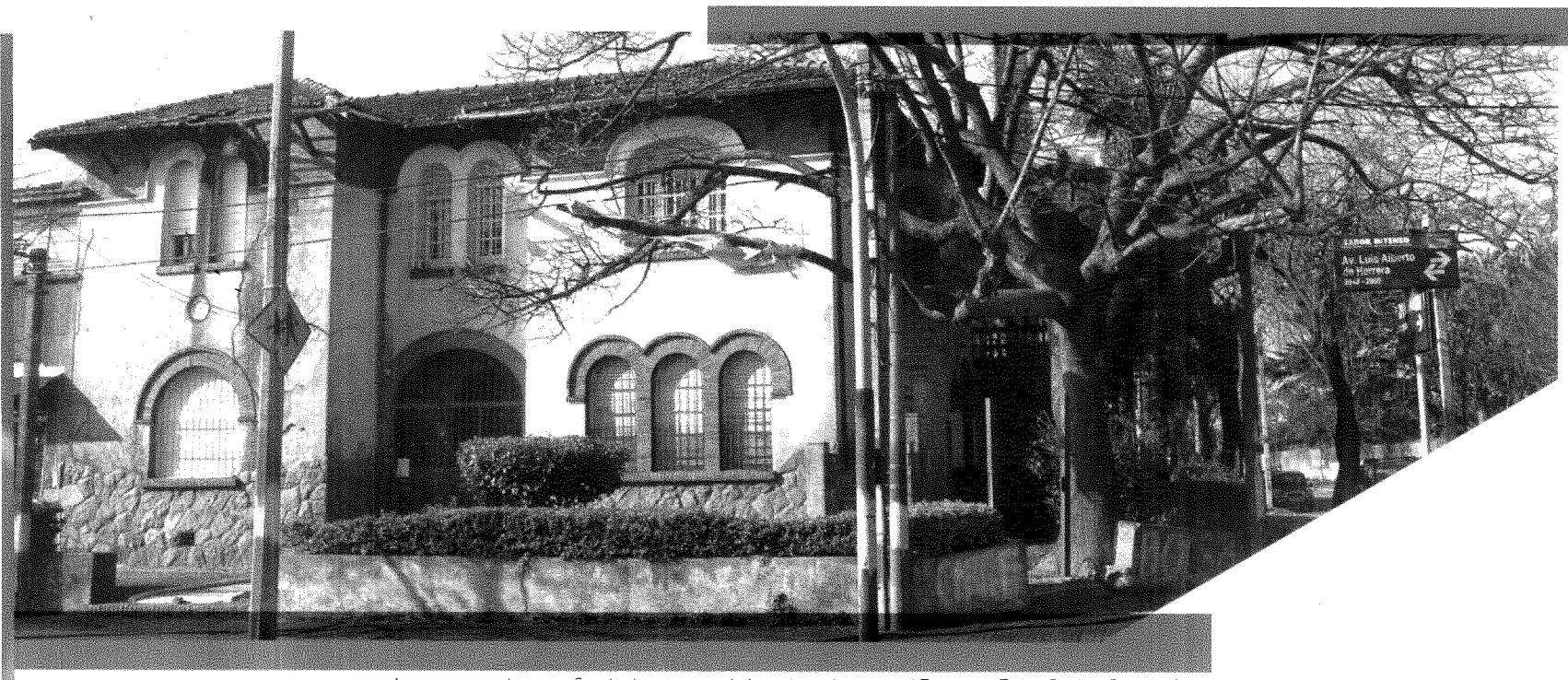
Bayardi no sólo detuvo ese operativo; también congeló la reestructura de la inteligencia del Estado y se abstuvo de recontratar a aquellos civiles que estaban realizando el trabajo de digitalización de las microfilmaciones, cuando el paso siguiente era comenzar a analizar la documentación y establecer las relaciones y vínculos que permitirían obtener nueva información. Esa tarea no fue realizada hasta el momento.

Este intrincado y desconcertante proceso tuvo, siete años después, un resultado inesperado. Fue la justicia la que decidió allanar el domicilio del coronel Castiglioni, acción que evitaron cuatro ministros de Defensa. El disparador fue el fallecimiento del coronel de 61 años. Quienes sabían –y eran muchos, civiles y militares– de los indicios que apuntaban a Castiglioni, se preguntaron qué pasaría ahora con toda esa documentación que quedaba huérfana de custodio. En esas circunstancias, semanas después del fallecimiento, el actual secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, Javier Miranda, elevó a la jueza Beatriz Larrieu un escrito en el que denunciaba que documentación oculta en poder del coronel Castiglioni podía contener información sobre la detención, tortura y asesinato de su padre, el escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron ubicados en diciembre de 2005 en los predios del Batallón 13 de Infantería. Aunque la jueza aún tenía pendiente la firma del secretario Miranda ratificando anteriores declaraciones aportadas en su calidad de testigo, se incorporó el escrito al expediente y se dio curso al allanamiento.

La incautación de las decenas de cajas con material militar secreto supone un gran salto en la búsqueda de documentación que permita avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos y las torturas. Una prueba del valor de la documentación incautada es la descacharrante crónica publicada por *El Observador*, con base en declaraciones de varios ex oficiales, cuyo objetivo es minimizar la importancia de los documentos (*"es muy poco probable que la información requisada tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar"*) o desviar la atención (*"lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente"*).

Hay, por un lado, una confesión patente en esos ex oficiales: ¿cómo saben lo que hay o no en esos documentos, a menos que ellos también los tengan o los hayan visto? Y además, un invento disparatado: la documentación sobre los informantes había sido incautada antes, en las microfilmaciones. En la Secretaría del Pasado Reciente se puso a recaudo un rollo, el número 8, que rezaba, precisamente: *"Informantes"*.(*)

(*) Casi un año después **Brecha** pudo confirmar que en el archivo incautado por la doctora Berrutti había, no uno, sino decenas de rollos microfilmados conteniendo *"Informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento III de la DGID"*, algunos de los cuales son el soporte documental de la serie de artículos sobre espionaje militar en democracia que integran este especial.



La casa en la que Castiglioni guardaba el archivo en 65 cajas. Foto: Pedro Pandolfo

ARCHIVO CASTIGLIONI REVELA ESPIONAJE MILITAR SOBRE PARTIDOS, JUECES Y POLÍTICOS HASTA 2009

SERVICIOS CONTINUADOS

El estamento político debería estar preocupado por la autonomía de la inteligencia militar que, desde 1985, venía desarrollando actividades de espionaje (seguimientos, escuchas clandestinas, interferencias telefónicas, infiltraciones) de las que fueron víctimas presidentes, ex presidentes, senadores, diputados, jueces y fiscales, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. Todo eso surge de dos informes elevados a una jueza sobre el contenido de la documentación incautada en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni, a los que accedió Brecha.

El presidente de la República Jorge Batlle era objeto de espionaje militar a mediados de 2002, en plena crisis económica, a través de la vigilancia, las escuchas y los seguimientos de los que era blanco el prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa, según se infiere de la lista de documentos y carpetas incautadas en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni, en el allanamiento judicial de octubre de 2015, hasta ahora mantenidos en secreto presumarial.

Ese espionaje derivó en un operativo de desestabilización del gobierno cuando se dieron a conocer las conversaciones interceptadas entre el prosecretario Costa y el diputado colorado Jorge Barrera, en las que el primero le advertía al segundo que el FMI se proponía "matar" al gobierno, ahogándolo financieramente en un contexto de virtual "corralito" bancario. El espionaje sobre los círculos más estrechos del presidente Batlle se refiere a tan sólo una de las decenas de carpetas que el coronel Castiglioni mantenía escondidas en su domicilio de la avenida Luis Alberto de Herrera, un viejo caserón ubicado a tres cuadras del edificio de la inteligencia militar donde este oficial ocupó cargos de jerarquía a lo largo de décadas (fue cesado en 2006). Su vivienda particular fue, en los hechos, el "enterradero" de un archivo clandestino alimentado con copias de documentos originales de los servicios y con material elaborado personalmente, que en algunos casos se refería a información de la vida privada de sus "objetivos". El volumen de información que manejaba el coronel Castiglioni –y su manera de utilizarla, a veces para presionar, a veces para desatar operaciones políticas– hizo que en las Fuerzas Armadas fuera un personaje temido.

De los documentos incautados surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos 2009 (aunque la fecha es tentativa), aplicando los mismos criterios de la dictadura.

Entre los más conspicuos "objetivos" de la inteligencia militar en democracia aparecen en las carpetas del coronel Castiglioni el general Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti (y su hijo Julio Luis, al frente de una carpeta rotulada "Cangrejo Rojo"), el contralmirante Eladio Moll, el coronel Pedro Montañez, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, la fiscal Mirtha Guianze, el pastor Emilio Castro, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez y los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Vomero, además de Leonardo Costa y Jorge Batlle (sometido a escuchas ya en 1983).
Estos nombres –y otros– están consignados en sendos informes elevados a la jueza penal Beatriz Larrieu, quien dispuso el allanamiento del domicilio del coronel Castiglioni cuando, a

raíz de su fallecimiento, cundió la alarma –en octubre del año pasado– de que el archivo "paralelo" o "clandestino", construido por el oficial de inteligencia a partir de la sustracción y/o copia de documentos oficiales, pudiera desaparecer definitivamente. La aparente incongruencia se explica en un recuadro aparte.

Los dos informes, elaborados en forma paralela por la magíster Isabel Wschebor (a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente) y el decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico (coordinador del equipo de historiadores de la UDELAR), son resultado de una primera aproximación al contenido de las 65 cajas incautadas; ambos informes, solicitados por la jueza Larrieu, son complementarios en la medida en que destacan distintos elementos o información del archivo, aunque el informe de Wschebor detalla con más precisión algunos contenidos para orientar a la magistrada.

Una parte importante del esquema de espionaje se apoyaba en un verdadero ejército de informantes e infiltrados, según las carpetas y cuadernos que contienen las listas de los espías, y otras donde se recoge, en cintas y en DVD, escuchas telefónicas y conversaciones grabadas *"en directo"* (caja 18). Es posible que esas listas de los autores de espionaje coincidan con las listas de diez rollos de microfilmes, incautados junto con otros mil rollos, por la entonces ministra de Defensa Nacional en una unidad de inteligencia; esos diez rollos habían sido precintados y lacrados por orden del general Pedro Barneix, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE) entre 2004 y 2006. (Barneix, procesado por el asesinato de Aldo Perrini, vecino de Carmelo, ocurrido en el cuartel de Colonia en 1974, se suicidó en setiembre de 2015 cuando la Policía fue a detenerlo.)
En todo caso, los rollos, que supuestamente están conservados en el Archivo General de la Nación, como los cuadernos, actualmente bajo la responsabilidad de la jueza penal de 7º Turno, Adriana de los Santos –que sustituyó a Beatriz Larrieu–, son pistas fundamentales para identificar a todo el esquema de espías que, en democracia, hasta hace poco tiempo (si es que no continúa activo) se infiltraba en partidos políticos y organizaciones sociales, y operaba cerca de las personalidades cuyas actividades interesaban a los jefes de la inteligencia militar. Muchos de los informantes fueron reclutados durante la dictadura entre detenidos sometidos a tortura; otros fueron reclutados mediante pagos por sus servicios.
Se ha argumentado que dichas listas son irrelevantes porque se identifican mediante seudónimos; pero no sería demasiado difícil ubicar la verdadera identidad de quien estaba infiltrado –u operaba como informante– en el directorio del Partido Nacional; o quien asistía, en el local del MLN Tupamaros, a las charlas sobre seguridad que se brindaban a un escogido grupo de militantes. Por lo pronto, se sabe que un tal Ricardo Fierro (si ese es su nombre verdadero), empleado de la Intendencia de Montevideo y afiliado a ADEOM, estaba encargado, en noviembre de 1990, de vigilar estrechamente al entonces intendente Tabaré Vázquez para determinar su rutina en función de los objetivos de una "operación Tabaré".
La vigilancia sobre Tabaré Vázquez se incrementó en vísperas de que obtuviera a la presidencia, en setiembre de 2004, como se infiere del espionaje ("Datos confidenciales. Memo 20043095") a la abogada socialista Azucena Berrutti, lo que sugiere que la inteligencia militar tenía ya información sobre la eventual designación de la profesional como ministra de Defensa Nacional para el caso del triunfo del Frente Amplio; ambos extremos se confirmaron a los pocos meses.

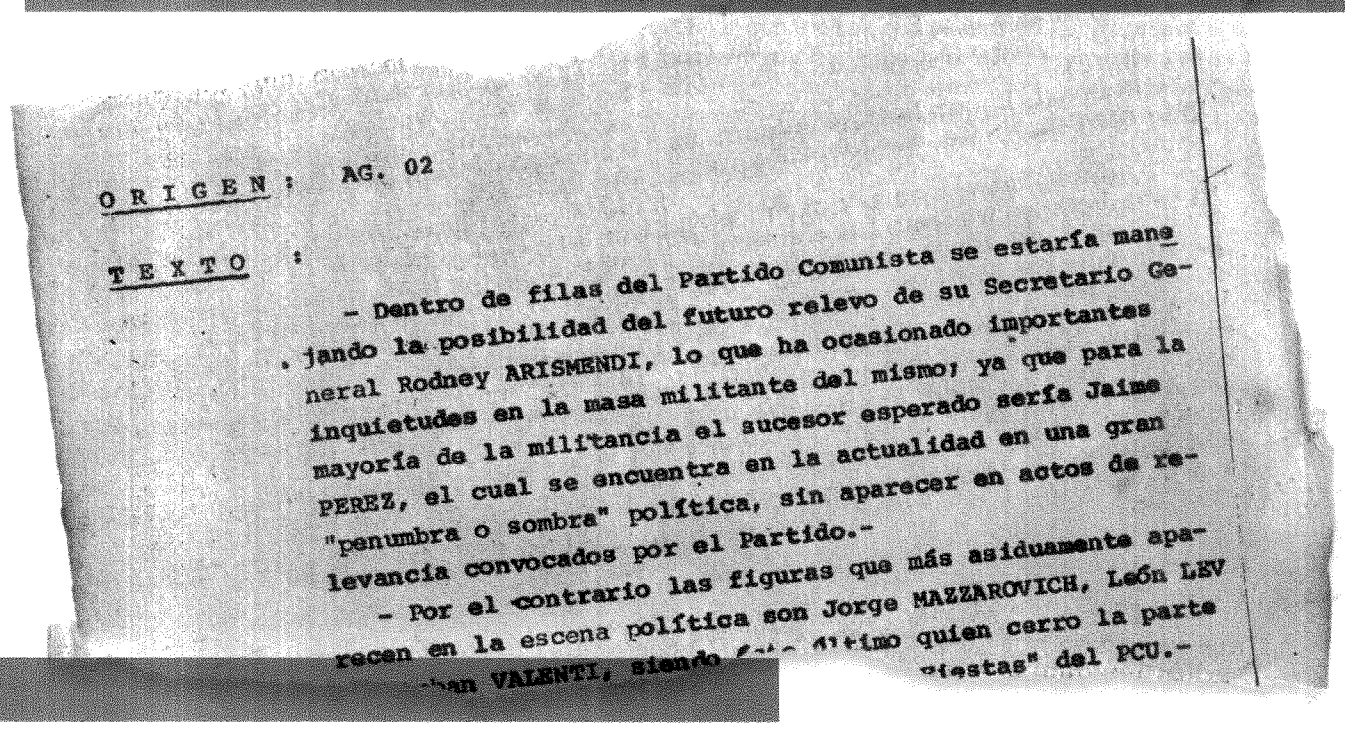
Determinar los detalles de la obtención de escuchas telefónicas entre el general Seregni y el coronel Pedro Montañez, en la peletería Metro, o el seguimiento de Macarena Gelman desde el mismo momento en que se confirmó su verdadera identidad (y la consiguiente vigilancia sobre su apropiador, el jefe de Policía de San José durante la segunda presidencia de Sanguinetti, Ángel Touriño, caja 47 B), o el espionaje al senador Michelini y al juez Reyes a raíz de la preocupación que provocó en el Ejército la decisión de buscar en unidades militares indicios de la "operación zanahoria" (sobre la que el informe de Rico señala que no se encontró ninguna referencia en las 65 cajas del coronel Castiglioni) permitirían dibujar las intenciones y los objetivos de la inteligencia militar en democracia.
El informe de Wschebor afirma: *"El archivo de Castiglioni constituye un testimonio único, en relación con las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país, y los escritos que se desprenden de dicho acervo muestran la preocupación por establecer los estrictos mecanismos de reserva en relación con las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto"*. Rico, por su parte, afirma que se verifica una continuidad entre la labor de inteligencia militar en dictadura y la que se desarrolló en democracia. Una pista podría encontrarse en el documento "Inteligencia. Transición. 6ª reunión de trabajo del Estado Mayor del Ejército. Directivas para 1985"; el documento está fechado en setiembre de 1984 (caja 9 II).

Los dos informes subrayan la profusión del material referido al espionaje a los partidos de izquierda, el Frente Amplio, el PVP, el MLN, el Partido Comunista y, en menor medida, al Partido Colorado y al Partido Nacional; o a los sindicatos (escuchas en los locales de SUTEL y UNTMRA en 1992) y las movilizaciones de trabajadores, así como a los organismos de derechos humanos, en especial durante los referendos sobre la ley de caducidad. El texto del decano Rico es exhaustivo en la enumeración de documentos e informes sobre el PCU y el MLN, sujetos, sus militantes, dirigentes y locales, a una casi permanente vigilancia desde la recuperación democrática, en un continuo con la producción de inteligencia de la dictadura. La caja 18 contiene una carpeta sobre el Frente Amplio con un documento que asigna al coronel Castiglioni el estudio del PCU y al coronel retirado Glauco Yannone (torturador profusamente denunciado, responsable del secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti) tareas similares sobre el MLN. En esa caja 18 también aparecen cuadernos con apuntes personales de Castiglioni sobre sus labores de inteligencia y la reorganización del S2, tanto desde el punto de vista de la estrategia militar como de su archivo.
Particularmente sugerente es el documento destacado en el escrito de Wschebor: *"Informe realizado en el período de la Comisión para la Paz, que contiene informaciones cuya fuente se discrimina como revista Lo nuestro y siempre se cita el año 2 y el número 5, a pesar de que la información refiere a muy diversos años y está siempre asociada a las circunstancias de desaparición forzada de uruguayos desaparecidos en Uruguay"*.

Del conjunto de la documentación relevada por los dos asistentes judiciales parece desprenderse una diferencia entre los documentos de origen institucional de aquellos que eran de particular interés del coronel Castiglioni. En primer lugar, los mapas y fotografías de unidades militares que fueron y son objeto de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Entre los documentos sobre predios militares, el informe de Wschebor destaca la carpeta que contiene *"fotografías del Grupo de Artillería Antiaérea número 1, que actualmente ha sido cautelado por el juzgado de Pando. Las fotografías muestran posibles obras a realizarse por OSE en la zona y la preocupación de Castiglioni podría estar asociada a que no realicen obras en el predio"*. Las fotos, los mapas y los documentos sobre predios militares hablan de la determinación del coronel de oponer medidas a cualquier avance en la búsqueda de la verdad.

Otros documentos son menos explícitos sobre los intereses del oficial de inteligencia a la hora de guardar papeles en su domicilio particular. Las carpetas referidas a la Propaganda Due (P2): la logia con origen en el Vaticano que en el Río de la Plata, de la mano de Licio Gelli, "el banquero de Dios", y su socio, el también banquero Umberto Ortolani, estableció fuertes vínculos con las dictaduras militares. Los documentos de Castiglioni (su tío, el inspector general Víctor Castiglioni, jefe de la inteligencia policial, comandó los allanamientos a las residencias de Gelli y Ortolani, y la incautación de 426 carpetas que después desaparecieron) se refieren a los uruguayos reclutados para la P2 y el organigrama de sus negocios y sociedades anónimas. Otro centro de interés era la masonería y la logia Tenientes de Artigas; y también esa especie de logia financiera, el grupo económico De Posadas.
El interés de Castiglioni era variado y ecléctico: iba desde las conversaciones de la dirección uruguaya de la inteligencia militar con su par argentina para analizar la propuesta del embajador estadounidense Cristopher Ashby sobre la apertura de una oficina de la CIA en Montevideo (caja 45 B), hasta la colección de documentos secretos varios sobre *"agentes, informantes o infiltrados y Manipulador"* (caja 7). En el otro extremo, el interés particular alcanzaba al Cuarteto de Nos (por el efecto negativo de sus canciones sobre el valor de los símbolos patrios), o la relación entre *"un cabo primero y su concubino (ex UJC)"*, que pretextaba un *"estudio de lealtad"* (¿a la patria, al ejército, a la pareja?), en julio de 1991.
En el voluminoso archivo Castiglioni, que reposa desde octubre del año pasado en dependencias judiciales, hay mucha tela para cortar... siempre que alguien empuñe las tijeras.

EL ESPIONAJE



ORIGEN : AG. 02

TEXTO :

- Dentro de filas del Partido Comunista se estaría manejando la posibilidad del futuro relevo de su Secretario General Rodney ARISMENDI, lo que ha ocasionado importantes inquietudes en la masa militante del mismo; ya que para la mayoría de la militancia el sucesor esperado sería Jaime PEREZ, el cual se encuentra en la actualidad en una gran "penumbra o sombra" política, sin aparecer en actos de relevancia convocados por el Partido.-

- Por el contrario las figuras que más asiduamente aparecen en la escena política son Jorge MAZZAROVICH, León LEV [illegible]ban VALENTI, siendo [illegible] último quien cerro la parte [illegible]iestas" del PCU.-

LOS DOCUMENTOS QUE PRUEBAN
EL ESPIONAJE MILITAR EN DEMOCRACIA

DE PROFESIÓN MANIPULADOR

Por razones que pueden ser entendibles, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dio argumentos deliberadamente confusos en las explicaciones que ofreció a una comisión del Senado sobre el contenido del llamado "archivo paralelo de inteligencia", que fue incautado en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni.

Y es entendible porque una eventual comisión investigadora parlamentaria –cuya instalación está a consideración de la bancada de diputados del Frente Amplio– podría revelar hasta dónde la secular autonomía militar está fuera del control civil. Sea como fuere, el ministro afirmó que el coronel retirado *"no tenía nada que ver con el Ministerio de Defensa Nacional, como tampoco el archivo que se encontró en su casa luego de su fallecimiento. Tenemos la certeza de que no existen archivos de inteligencia"*. Tal explicación induce a pensar que el coronel Castiglioni elaboró los documentos incautados después de que pasó a situación de retiro. También el ministro afirmó: *"Hace tiempo, no sólo en este gobierno, también en los anteriores, que Defensa no realiza inteligencia con personas u organismos"*.

Las dos afirmaciones son temerarias: los documentos en poder de Castiglioni son fotocopias de originales producidos en reparticiones de la inteligencia militar; son, por tanto, documentos oficiales que están archivados, y esos documentos se refieren a seguimientos de personas, captación de informantes e infiltración de agentes en partidos políticos, sindicatos y empresas del Estado, en operativos realizados en democracia que abarcan a todos los períodos de gobierno.

Estas afirmaciones están sustentadas en la documentación que está en poder de **Brecha** y cuyo análisis arroja conclusiones sorprendentes sobre los criterios aplicados, las estrategias de espionaje, los "objetivos" priorizados, los métodos de reclutamiento de informantes, la infraestructura y recursos humanos aplicados al espionaje, y hasta la contabilidad de los "sueldos" que se pagaban a los soplones. En sucesivas publicaciones, **Brecha** brindará detalles del espionaje a que fueron sometidos los "objetivos" de la inteligencia militar, por un criterio de transparencia, y porque los espiados tienen derecho a manejar la información que permita identificar a los espías, que en todos los casos eran miembros de las organizaciones espiadas. Tienen, también, el derecho de reclamar al gobierno el acceso a esa información.

"LA AGENCIA." Durante el período en que las actividades de inteligencia militar funcionaron en la órbita de la Dirección Nacional de Información de Defensa (sucesora del Servicio de Información de Defensa y antecesora de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado), el Departamento III gustaba llamarse a sí mismo como "la agencia", en una *remake* local de la famosa CIA, precisamente porque contaba con un verdadero ejército de espías. Así, en los formularios donde se transcriben los informes, se consignan los detalles, se adosan comentarios y se estampan directivas, los responsables suelen escribir: *"A la agencia no le sirve la información aportada"*, o: *"Parece que el agente quiere desvincularse de la agencia"*.

Por lo que se desprende de los documentos, el Departamento III (que podría ser de contrainteligencia) mantenía una estricta compartimentación y un sistema de claves: el agente era designado con un número, pero en la transcripción de las entrevistas en ocasiones se lo identificaba con un seudónimo, "Salvador", "Martín", etcétera. Cada agente tenía un "manipulador", un militar de inteligencia, presuntamente oficial, también identificado con un seudónimo ("Mauro", "Solari", "Diego"), cuyo responsable monitoreaba las entrevistas que se realizaban frecuentemente en las calles y ocasionalmente en la "base" y la "base II", aunque no hay referencias de su ubicación.

El formulario tiene casilleros para la ubicación y fecha del encuentro, la hora y la duración; ocasionalmente, además del número del agente y el seudónimo del manipulador, se consigna el nombre femenino de quien realizaba la transcripción de las conversaciones grabadas. Se identifica el

vehículo utilizado y, cuando es propiedad del informante, el gasto de nafta; también el consumo cuando el encuentro es en un bar. En cada encuentro se establecía el próximo contacto, pero en ocasiones el infiltrado recibía una llamada telefónica convocándolo para una reunión. Hay una cierta rutina en la elección de los lugares de encuentro, que sugiere la zona donde vive o trabaja el agente.

Pese a los rigurosos criterios de compartimentación, en muchos casos el registro de la relación entre agente y manipulador dejaba al descubierto pistas para la identificación del espía. Así ocurría con un "agente" que sacaba información de la Corte Electoral en el período de verificación de firmas para el plebiscito, atendiendo a los pedidos sobre nombres y direcciones; en la transcripción de los informes se indican los horarios y la extensión telefónica para contactarlo. Un fotógrafo que durante dos años espió los movimientos, escuchó conversaciones en *Mate Amargo*, el quincenario del MLN, y entregó fotografías de actos y manifestaciones (*"que no saque panorámicas"*, indicó a mano el supervisor), aportó tanta información sobre personas, colegas y actividades, que su identificación sería tarea fácil. O el caso de un manipulador que pretendió retomar el contacto con una joven, llamándola a su casa por teléfono, sin ubicarla; insistió tanto que el padre de la joven llamó a uno de los teléfonos de la "agencia", advirtiendo que no molestaran más a su hija.

El manipulador pudo confirmar después que el padre obtuvo el número buscando en la agenda de su hija. Un informante del Partido Colorado dio tantas referencias personales para explicar por qué había abandonado el contacto, que su identidad real no sería un problema. Una "fuente" consignó la razón de haber accedido a cierta información: *"Yo soy mozo del bar Roma"*. El agente que trabajaba para la "agencia" en la Intendencia obtuvo planos de casas y edificios de apartamentos, lo que sugiere no solamente vigilancia sino también allanamiento oculto, como le ocurrió al ministro del Interior del primer gobierno frenteamplista.

La "agencia" procuraba que el agente no sólo obtuviera información o documentos a su alcance; también pretendía que se involucrara en actividades de seguimiento y de relevamiento. El agente 17-G realizó un relevamiento en la finca de San Nicolás 1408 para establecer si allí residían personas llegadas desde Argentina. *"Intervinieron la fuente y la señora."* El mismo agente 17-G relevó el fondo, el garaje y la planta baja de la finca de Pilcomayo 4776. Se establecieron los nombres de los que vivían allí y se detectaron libros de izquierda, fotos del Che Guevara, balconera del voto verde y bandera del Frente Amplio. No se especificó qué "cobertura" utilizaron los agentes; en cambio, la inspección en una farmacia del Cerro y los apartamentos del edificio pudo ser efectuada haciéndose pasar los "agentes" como empleados de OSE.
Del otro lado, los nombres de los funcionarios de inteligencia y de los militares que cumplían trabajos de campo como manipuladores están muy resguardados.

Los manipuladores también están dispuestos a resolver los problemas económicos de los informantes, pero la entrega de dinero es a cambio de resultados

En la documentación a la que accedió **Brecha**, sólo aparece un nombre (con visos de ser el real) en unos "partes de informe" del jefe del Departamento III, capitán Robert Terra, sobre "MLN-T", sobre *"Evaluación situación actual del PCU"*, sobre *"Relevo de Rodney Arismendi"*.

LOS MÉTODOS DE LA AGENCIA. Los documentos permiten establecer los métodos de relacionamiento con los "agentes". En general establecen vínculos que fomentan la confianza y son permisivos con las "faltas" del informante cuando no concurre a un contacto o cuando da excusas para explicar por qué no obtuvo determinado documento, sea éste el nombre del propietario de un vehículo que otro agente ubicó en las cercanías de un zonal del Partido Comunista o de un cantón del MLN, el texto de una comunicación interna en AUTE, o la veracidad de las informaciones brindadas por un espía de la Alianza Nacional, un grupo de extrema derecha con vínculos entre los partidarios de Aldo Rico y la derecha peronista en Argentina.
Los manipuladores también están dispuestos a resolver, en alguna medida, los problemas económicos de los informantes, pero en todos los casos la entrega de dinero –se indica expresamente– es a cambio de resultados. Los "sueldos" que aportan, y que quedan estampados en los formularios, varían según la intensidad de la actividad o la calidad de la información: en un encuentro se entregan 3 mil pesos (a moneda corriente de 1987), en otro se pagan 10 mil pesos, y a un informante se le pide un estimativo de cuánto necesita para vivir y a la vez realizar las tareas, ¿70 mil, 90 mil pesos? Al agente 35, por ejemplo, se le pagaron 10 mil pesos en enero de 1987 por la información que trasmitió sobre las reuniones del Secretariado del PIT-CNT.

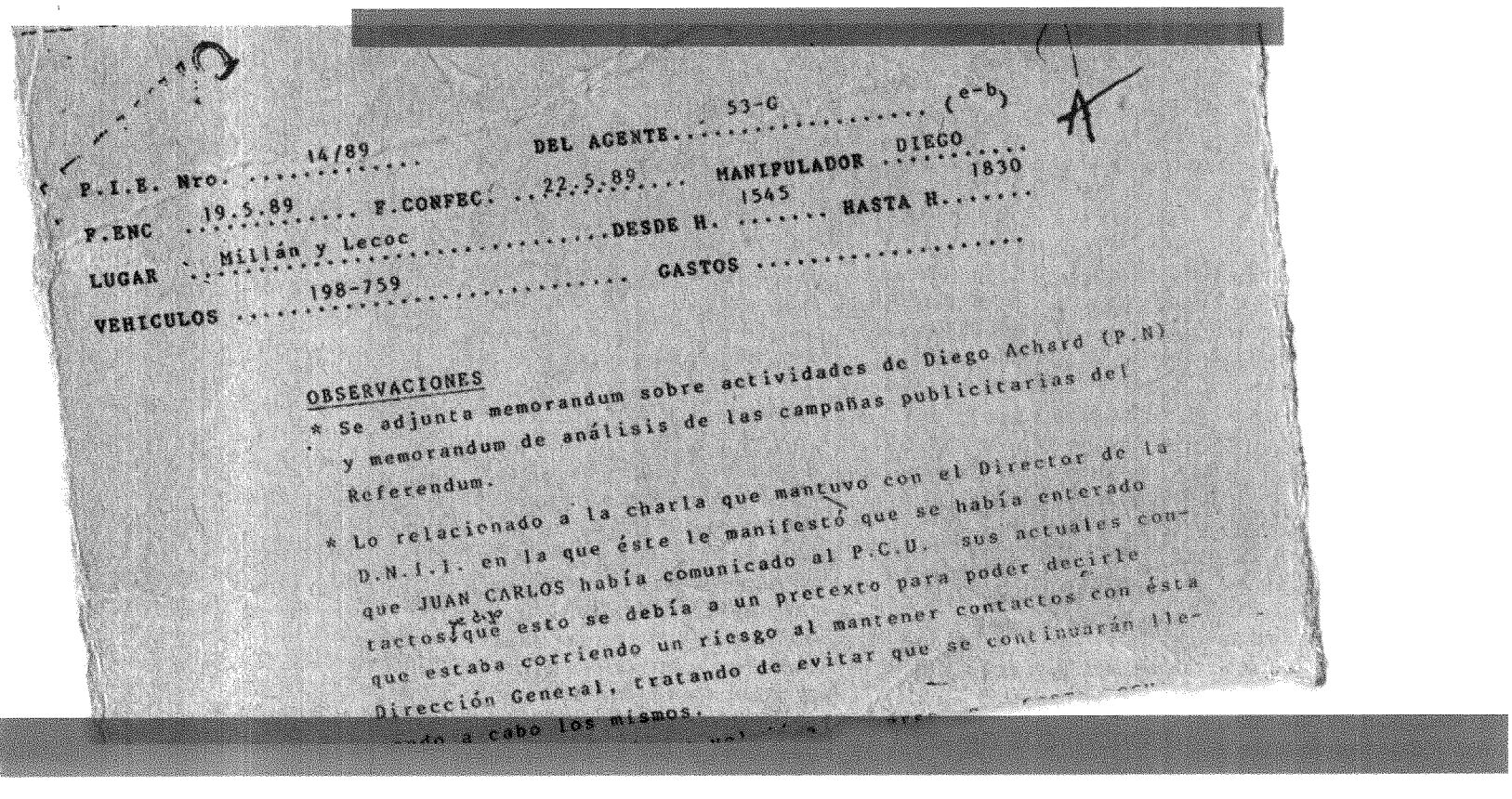
Por lo general, el manipulador no expresa al espía las críticas que internamente se hacen a la calidad de la información; simplemente se insiste en concretar determinadas tareas y muy a menudo se consigna, en los diálogos, que se debe tener cuidado, que el espía no debe arriesgarse a ser detectado. Pero esa condescendencia en ocasiones da paso a verdaderas amenazas y duras críticas que descubren la real naturaleza del vínculo. Un encuentro entre manipulador e informante fue particularmente violento cuando el primero vio accidentalmente en la calle al espía, quien había faltado a un contacto porque *"tuve que trabajar"*. *"Guillermo te quiere pegar un tiro"*, amenazó el manipulador.

La "agencia" no descarta ningún reclutamiento, ni siquiera cuando el manipulador descubre que el informante en realidad es un delincuente que vende autos robados. Los documentos revelan el interés del manipulador por definir la personalidad de los "objetivos" que son espiados por su agente; cuando el objetivo está en un puesto clave, de donde se podría obtener directamente la información, el manipulador pregunta sobre el estilo de vida, sobre la existencia de amantes y sobre el volumen de deudas; aunque no se dice, se buscan elementos para un nuevo reclutamiento. Así, el agente 20-G, que en agosto de 1989 vivía pegado al domicilio del objetivo, se pasaba el día y la noche en la ventana, consignando todos los movimientos de un militante del Partido Comunista. En uno de los formularios, su manipulador, "Diego", consignaba: *"Se continuaron las averiguaciones relacionadas a la posible amante de (...). La NNF se llama Margarita y se la conoce en el barrio como la flaca Margarita"*.
En los partes del agente 07, que informaba sobre *Mate Amargo*, el MRO y el MPP, el manipulador le preguntaba por un periodista y sus acuciantes problemas de dinero; el agente era escéptico sobre el reclutamiento.

LOS FOCOS DE INTERÉS. La "agencia" no tenía límites a la hora de presionar. Quien en los documentos aparece como "agente 06-E" era en realidad el esposo de una integrante del Comité Central del Partido Comunista que, como se consigna, *"se muestra por el momento esquivo a colaborar"*, pese a que accedió a mantener contactos en la calle, en abril de 1989. El supervisor "Guillermo" y el manipulador "Diego" concluyen que los argumentos brindados por la fuente *"son una estratagema para que se le corte la vigilancia y seguimiento a que está sometido"*. El cerco era implacable: el agente no concurrió a un encuentro en Propios y Joanicó, por lo que *"se concurrió a la casa y se detectó su vehículo estacionado en la cochera. Se realizó una llamada telefónica a su casa y atendió una NNF (posible esposa)"*. El manipulador consignó que *"la fuente está evitando a toda costa ser enganchado"*, deduce que *"no ha realizado ninguna comunicación al PCU sobre su abordaje"*, y en el formulario explicó las posibles razones: *"Podría ser por miedo a represalias o porque en su pasado hay algo turbio"*.

El episodio revela el profundo interés en ubicar una fuente cercana al Comité Central. El PCU era uno de los objetivos prioritarios de la inteligencia militar a la par del MLN, el MPP, el PIT-CNT, y el Partido Nacional, al menos a lo largo del proceso sobre la ley de caducidad y su derogación mediante referéndum. Pero el grueso del espionaje se enfocaba en las organizaciones de izquierda y en los sindicatos, donde los agentes se preocupaban de establecer la filiación política de los dirigentes y de todos los militantes que aparecían en las listas. Muchos de los informantes espiaban en círculos de base de las organizaciones políticas, pero tenían una gran capacidad para hacer hablar a los responsables de un grupo o a aquellos que tenían contacto con las direcciones.

Queda claro que la inteligencia militar espiaba a personas y organizaciones, en democracia. Lo que no está claro, y una comisión investigadora podría descubrir, es el para qué, con qué finalidad se espiaba y qué líneas de acción, política o represiva, se generaban a partir de la información obtenida, que costaba tanto trabajo y tanto dinero.



P.I.E. Nro. 14/89 DEL AGENTE 53-G (e-b)
F.ENC 19.5.89 F.CONFEC. 22.5.89 MANIPULADOR DIEGO
LUGAR Millán y Lecoc DESDE H. 1545 HASTA H. 1830
VEHICULOS 198-759 GASTOS

OBSERVACIONES
* Se adjunta memorandum sobre actividades de Diego Achard (P.N) y memorandum de análisis de las campañas publicitarias del Referendum.
* Lo relacionado a la charla que mantuvo con el Director de la D.N.I.I. en la que éste le manifestó que se había enterado que JUAN CARLOS había comunicado al P.C.U. sus actuales contactos y que esto se debía a un pretexto para poder decirle que estaba corriendo un riesgo al mantener contactos con ésta Dirección General, tratando de evitar que se continuarán llevando a cabo los mismos.

LA INFILTRACIÓN EN EL PARTIDO NACIONAL EN LOS AÑOS PREVIOS AL VOTO VERDE DE ALTO NIVEL

El año 1987 se estrenaba bajo el signo de la caducidad. Ese verano no habría vacaciones para muchos: políticos, activistas, periodistas y también militares. Como culminación de un proceso de presiones e intimidaciones bajo la batuta del comandante del Ejército y después ministro de Defensa Nacional del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, general Hugo Medina, el 22 de diciembre de 1986 una mayoría del Senado integrada por blancos y colorados había votado la llamada ley de caducidad, que otorgaba una impunidad absoluta a todos los militares y policías involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Antes de que culminara el año, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos lanzó la idea de juntar firmas para convocar a un referéndum anulatorio de la ley, y esa propuesta sacudió a toda la sociedad, en especial a quienes creían que la "solución parlamentaria" liquidaba el problema, tanto aquellos militantes desmoralizados como aquellos militares que respiraban tranquilos.

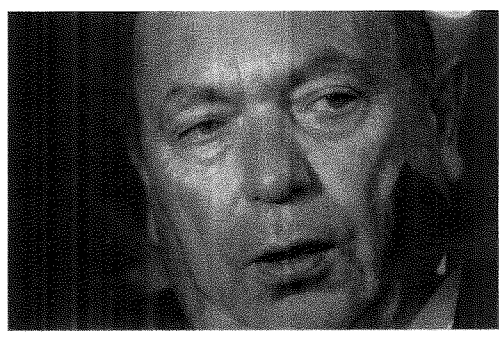
La inteligencia militar se puso inmediatamente en movimiento. Muchos manipuladores que mantenían vínculos habituales con sus informantes ordenaron volcar toda la atención de sus agentes al proceso de recolección de firmas y a las derivaciones que se producían a nivel político; para los militares era una prioridad adelantarse a una eventual eliminación de la impunidad.

La actitud del Partido Nacional (PN) aparecía como de atención prioritaria, a juzgar por el volumen de documentos elaborados en esos meses de verano, formularios (véase nota central) que correspondían a varios informantes reclutados en distintos círculos del PN. Los documentos no lo especifican, pero por las características de la información trasmitida, algunos "agentes" estaban muy cerca de los principales dirigentes nacionalistas.

Un agente identificado como 04 mantuvo con "Rodolfo", su manipulador, una entrevista de una hora en Gonzalo Ramírez y Jackson, en la tarde del 7 de enero de 1987, y es el primero de una serie de documentos a lo largo de enero y febrero. El informe, evaluado como B-3, refiere a las opiniones sobre el posible referéndum entre los dirigentes blancos. La "fuente" informa sobre la opinión de Juan Raúl Ferreira y Diego Achard, para quienes *"el lanzamiento de la campaña por parte del Frente Amplio puede ser un nuevo golpe político para ese sector, ya que consideran que no se van a reunir las firmas necesarias"*.

El agente 04 atribuye a Ferreira Aldunate la siguiente opinión: *"Wilson considera que el MLN se adelantó a todo el Frente Amplio, con lo cual es posible que ganen espacio político, ya que con el tema existe mucha gente que se ha izquierdizado, pudiendo volcarse al MLN"*.

A comienzos de 1987 los tupamaros aún no habían resuelto solicitar el ingreso al Frente Amplio y agitaban la propuesta de un Frente Grande. *"Según Wilson* –dice el informante–, *el MLN considera que no está en condiciones de hacer justicia revolucionaria, para lo cual entonces quiere ganar espacio político para posteriormente realizarla."*



Alberto Zumarán en 1999. Foto: Archivo Acar.

El agente recuerda que el PN todavía *"no ha adoptado una posición para el supuesto caso de que se junten las firmas"*, pero adelanta que *"se espera* (¿quiénes, dónde?) *que Carlos Julio Pereyra no adopte una posición contraria a la de Wilson, porque eso significaría la quiebra del Partido Nacional"*. Y agrega que luego de la última reunión del Movimiento Nacional

de Rocha *"habría habido una reconsideración por parte de los que no apoyaron la ley, principalmente por las presiones ejercidas por Gonzalo Aguirre"*, uno de los que tienen –a juicio del informante– mayor peso político en el Movimiento, *"y cuyo alejamiento sería nefasto para Carlos Julio Pereyra"*.

Una semana después, el agente 04 informaba a "Rodolfo" sobre el campamento de la juventud del Partido Nacional en Kiyú. Salvo el núcleo de militancia más fuerte de Montevideo, *"hubo un trabajo a fondo con respecto a la ley"* entre las delegaciones de todo el Interior, que *"venían hechos una furia con respecto a los derechos humanos"*. Según el informante, *"el trabajo de ablandamiento fue de la siguiente manera: el domingo estuvieron presentes en todo momento Diego Achard y Lucas Mansilla* (ex dirigente tupamaro); *el lunes fue Guillermo García Costa; el jueves fue Juan Raúl Ferreira, el viernes fue* (Alberto) *Zumarán, y cuando llegó Wilson Ferreira el sábado ya estaba todo previsto. La gente que estaba más radical, cuando llegó Wilson les habló y apoyaron tal postura"*.

El informe del agente 04 consigna, en lo que parecía ser un momento crítico de la relación con la juventud del partido, las intervenciones fundamentales de Achard y Zumarán. Achard habría dicho que *"tenía información de fuente fidedigna"* de que había *"grupos paramilitares armados y que existían también grupos de izquierda armados"*, de modo que fue *"de fundamental importancia encontrar una ley que calmara los ánimos y moderara esta situación"*. El texto definitivo, después de varias versiones, aprobado por el Senado un mes antes, había sido de la autoría del senador Martín Sturla.

Zumarán, según el informante, habló de la *"necesidad de captar los votos que quedaron o que supuestamente han quedado a raíz de la radicalización del Frente Amplio hacia la izquierda, o sea, los votos de centroizquierda, en una palabra, los votos de* (Hugo) *Batalla"*. Achard –consigna el informe de inteligencia– explicó que *"era un plan del partido para disputar el gobierno del 89, y que dentro de ese plan, obviamente está sacar del medio a Batalla. Hay que presentarlo como un hombre bueno, pero más adelante habrá que decirle a la gente de que es tan bueno que ni siquiera sirve para gobernar"*.

Un informe elaborado en vísperas del congreso del Partido Nacional, en febrero de 1987, sobre la estrategia política de Wilson Ferreira Aldunate, revela la aparente facilidad del infiltrado para obtener información sensible. El agente opina que *"el lograr correr el FA hacia la izquierda era un objetivo desde que Wilson salió de la cárcel. En estos dos años pasados el Partido Nacional recuperó o tuvo una estrategia para recuperar los votos conservadores que se volcaron hacia Sanguinetti"* en las elecciones de 1984. Con la "izquierdización" del FA en torno a la impunidad, *"queda todo un espacio vacío que es lo que el partido intenta cubrir"*. Pero, dice el informante, si se produce una coparticipación como promueve Jorge Batlle, *"si el partido integra un gabinete, es decir, se compromete con el gobierno de esa forma, de hecho está dejando de ser oposición, y el FA vuelve a ocupar el espacio de centroizquierda, que es lo que busca dicha coalición"*. Una coyuntura tal, en opinión del informante, *"a* (Dardo) *Ortiz y a* (Luis Alberto) *Lacalle los podría conformar. Pero a Wilson le costaría mucho más"*.

Respecto de la disciplina sobre una eventual recolección de firmas, el informe atribuye a Zumarán la reflexión de que si Por la Patria decide apoyar la junta de firmas, *"salen todos a la calle"*; pero si decide no recolectar, *"a quien salga a juntar se le aplicará la disciplina del partido y la expulsión del Movimiento. Con respecto a los que votaron en contra de la ley, el caso de* (Óscar) *López Balestra y otros, dijo Zumarán que esta era la última vez que estaba dispuesto a perdonar una situación de este tipo"*.

Otros agentes informan sobre el PN y alguno desde la redacción del semanario *La Democracia*, pero el agente 04 parece tener acceso a las opiniones vertidas en el seno del Directorio del partido. A diferencia del método de trabajo con los informantes, donde aparecen documentos con transcripciones de las conversaciones grabadas en los encuentros, el agente 04 entrega textos previamente elaborados. Salvo que algunos de sus datos hayan sido captados en reuniones muy pequeñas, parece poco probable que pueda ser identificado en su doble condición de militante blanco y a la vez informante de la inteligencia militar. En los formularios no se consigna ningún pago por sus servicios.

UN INFILTRADO EN LOS ENCUENTROS ENTRE WILSONISTAS Y MILITARES

LOS CORONELES TIENEN QUIEN LES ESCRIBA

La inteligencia militar detestaba enterarse por otros de asuntos que la concernían. Especialmente si la información provenía de la inteligencia policial, a la que despreciaban por aquello de ver la paja en ojo ajeno... De ahí que cuando uno de los subcomisarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) que estaban a sueldo de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) pasó el dato de las reuniones de dirigentes blancos con coroneles del Ejército, la primera reacción del coordinador del Departamento III fue consignar en el correspondiente parte la directiva de *"obtener todo lo que se tenga"* sobre uno de los militares, el coronel Carbone.

El informe del agente 53-G –un viejo oficial de policía curtido en la represión y resentido con sus superiores– fue entregado verbalmente al manipulador Diego en una conversación grababa dentro de un Volkswagen beige que circuló por el Prado en la noche del 14 de abril de 1989. Ocho días antes, el informante policial –cuyo seudónimo era Fabián– había concurrido a una reunión, en un lugar que no especificó, para trabar un encuentro *"entre los coroneles Lezama y Carbone con dos voceros del sector de Juan Raúl Ferreira, Hugo Alonso y Pérez Sparano"*. La reunión fue preparatoria de otra, entre los militares nombrados y dos cercanos colaboradores de Juan Raúl: Bernardo Berro y el secretario de Wilson Ferreira, Diego Achard. Programada para el 15 de abril en la casa de Berro, los coroneles dictaron la agenda: *"Se dejó asentado como condición de la próxima reunión el que Diego Achard y Bernardo Berro pusieran en claro comportamientos y actitudes suyas en el pasado"*, escribió el manipulador. La prevención tenía su origen en que Achard había militado anteriormente en el Partido Comunista y había tenido un protagonismo singular en la conformación de la Convergencia Democrática, una coalición entre comunistas, sectores socialistas, sectores tupamaros y los blancos de Wilson Ferreira. Convergencia surgió en el exilio en México y generó una crisis dentro del clandestino Frente Amplio (FA), cuando los comunistas y otros sectores del FA apoyaron la propuesta de votar la lista de los blancos que respondían a Ferreira en las elecciones internas de 1982; desde la cárcel, el general Liber Seregni debió organizar un encuentro entre un representante suyo y Rodney Arismendi –que se verificó en Italia– para que los comunistas votaran en blanco junto con el resto del Frente. La orden de Arismendi, desde Europa, llegó tarde a algunos sectores del Partido Comunista.

El contacto entre los coroneles y el grupo de Juan Raúl Ferreira fue promovido por los dirigentes blancos, dado que *"el sector de Por la Patria quiere recomponer vínculos con los militares"*, que permanecían rotos pese al apoyo de Wilson Ferreira a la ley de caducidad en diciembre de 1986 y la decidida actitud de impedir su derogación en el referéndum de ese año de 1989. El intermediario en ese contacto fue el agente 53-G, en su calidad de funcionario de la DNII y no de espía militar.

Después de esa segunda reunión, a la que concurrió munido de todos los antecedentes de la DGID sobre Diego Achard, el agente Fabián reafirmó una convicción a lo largo del encuentro, *"que se realizó en buenos términos"*. Según consignó el manipulador en su informe, *"la fuente arribó a la conclusión de que tanto D Achard como su secretario Pérez Esparano* (sic) *son integrantes del PCU, no han dejado de pertenecer al mismo y la misión que tienen es infiltrarse dentro del Partido Nacional y una vez adentro desorganizarlo, hacerlo inoperante y llegar a su destrucción"*.

El Departamento III de la DGID prestaba especial atención a la actividad de Achard en el Partido Nacional. A diferencia de Lucas Mansilla, dirigente tupamaro que se pasó a las filas del Partido Nacional, la inteligencia militar sospechaba que Achard hacía un doble juego. Pero lo más significativo, en el guiso del espionaje, era la pretensión, en caso de confirmarse las sospechas, de convertir a Achard en un triple agente, que le daría a la inteligencia militar la información de los círculos más estrechos del Partido Comunista.

Foto: Nancy Urrutia.

ESPIONAJE DE LA INTELIGENCIA MILITAR EN DEMOCRACIA

MERCENARIOS Y VOCACIONALES

El aparato de inteligencia militar, que reacomodó su funcionamiento a la nueva realidad emergente de la redemocratización –pero manteniendo inalterables los criterios estratégicos y los objetivos que venían de la dictadura–, abarcó todos los aspectos de eventuales informaciones que pudieran aportar control y poder sobre cualquier sector de la sociedad, incluso los delincuentes.

La legalización de partidos políticos y la reestructura de la actividad sindical (en especial en los sindicatos de las estratégicas empresas estatales) demandó un esfuerzo de reclutamiento de informantes que derivó en un verdadero ejército de agentes, algunos de los cuales habían sido reclutados en las "especiales" condiciones de las cárceles y los cuarteles. De todas formas, el carácter mercenario del espionaje fue una constante, aun cuando el reclutamiento no fuera por dinero, sino por presiones, amenazas y chantajes. La inteligencia militar consumió parte del presupuesto del Ministerio de Defensa y tuvo a su disposición toda la logística de vehículos, bases de funcionamiento y el acceso a la tecnología de cada momento. La casa central de la "agencia", tal como se denomina al Departamento III de la Dirección de Inteligencia, estaba ubicada en la casona de Monte Caseros y Larrañaga.

De los documentos a los que tuvo acceso **Brecha** surge que el Partido Comunista, el Movimiento de Liberación Nacional y el PIT-CNT fueron los principales "objetivos" de la inteligencia militar. Sin embargo, había "agentes" con una vocación especial que los llevaba a informar de cuanta cosa se enteraran en el trabajo, en el sindicato o en el barrio.

ESPIANDO EN LA BASE. Tal es el caso del agente 35, que militaba en el seccional Mendiola del Partido Comunista, pero no perdía ocasión de apuntar las matrículas de los vehículos estacionados frente al local del zonal 5 del MLN, en La Teja. *"La fuente vio a integrantes del zonal 5 del MLN en la zona de La Teja realizando una pegatina con leyendas alusivas al Primero de Mayo. Entre los intervinientes detectó al encargado de propaganda del zonal 5 y al 'Cabeza' Aquino"*, escribió el manipulador Fabián, en abril de 1988. *"La fuente detectó al vehículo matrícula 222.306, camioneta azul con personas que ingresaron al local."* Una anotación a mano agregaba, después de una consulta a la Intendencia de Montevideo, que la propietaria *"vive en la calle Alejandro Gallinal"*.

El agente 35 daba cuenta periódicamente a la inteligencia militar sobre los informes que "bajaban" al seccional, informes que solía comentar con el secretario político del Mendiola, Miguel Curto. El secretario se quejaba en mayo de 1988 del *"trabajo opaco"* del seccional, que sólo había logrado cinco afiliaciones de las 50 previstas. En junio de 1989 el agente 35 informaba que el PCU no estaba de acuerdo con el conflicto en la fábrica Bao, impulsado por el MLN. La rivalidad entre comunistas y tupamaros es una constante en los informes referidos al PCU. Así, el agente consignó que Miguel Villar, en su informe al seccional, dijo que *"el PVP está impulsando un trabajo conjunto con el MLN, ya planteó el ingreso al FA. Dijo que el MLN quiere reflotar los CAT* (Comandos de Apoyo Tupamaro que surgieron a comienzos de los años setenta) *trabajando en los comités de base"*. Fernando Plasencia, secretario de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), dijo –según el agente– que *"el Frente Juvenil del MLN está tratando de revivir el FER 68 para oponerse a ASCEEP-FEUU"*. Fueran totalmente ciertas o no las apreciaciones de los informantes recogidas en centros de militancia, esa era la materia informativa con la que trabajaba la inteligencia militar; a veces, ciertas afirmaciones extremas eran puestas en duda por los manipuladores en sus comentarios a sus superiores. La red de informantes del PCU incluía, entre otros, al agente 58, que operaba en el seccional Balbi; al agente 93, que describía las actividades de la UJC y que se explayó sobre un campamento en Solymar; al agente 56, que no podía ofrecer mayor información a la "agencia" dado que *"no tenía un funcionamiento orgánico al comienzo del año por la falta de los secretarios"* en la agrupación Bleier, pese a lo cual seguía recibiendo viáticos por gastos; al agente 33, que trabajaba en la Central Batlle y militaba en AUTE (solía hacer relevamientos ideológicos de los funcionarios del ente y de los militantes del sindicato, y se asombraba de la participación de Wladimir Turiansky en una asamblea en la que votó con la dirección pese a sus críticas habituales); o al agente 25, quien desde Fray Bentos coincidía con el agente 35 sobre las dificultades financieras del partido (los secretarios rentados de los zonales y seccionales tenían atrasos en sus sueldos) y daba cuenta del *"informe de la secretaria de finanzas, Anabela Damasco, sobre la deuda de 80 mil pesos de la estructura de Fray Bentos"*, o *"las dificultades en* La Hora, *en* El Popular, *e incluso en la editorial Pueblos Unidos"*.

Tales alarmas presupuestales llevaron a los analistas de la "agencia" a concluir que *"la delicada situación financiera del Partido Comunista está estrechamente vinculada a la baja militancia y por ende a las escasas cotizaciones que se obtienen"*. Al recibir correspondencia con las listas de Democracia Avanzada por el departamento de Río Negro, el manipulador consignó que *"la fuente figura como primer titular a la Junta Electoral del Departamento"*.

En el momento de informar que *"las remuneraciones de los rentados del partido son: Arismendi, 60 mil, Comité Central, 55 mil, rentados de los seccionales, 35 mil, conserjes 25 mil"* y que, *"en el acto del aniversario del PCU en el Cilindro Municipal, Javier Tassino le informó a la fuente que seguían las purgas de antiguos rentados por nuevos cuadros"*, el agente 35 daba cuenta de los roces entre el PCU y el MLN en La Teja y el Cerro: *"A raíz de los actos del 7 y 8, Miguel Curto, del seccional Mendiola, informó a la fuente que Jorge Zabalza y Manera Lluveras concurrieron a los seccionales 14 y Cerro del PCU para alertar que si se tapaban las pegatinas del MLN tomarían represalias y que iban a estar armados"*. El agente agregaba que *"el regional 3 informó al Comité Central y León Lev ordenó que saliera la mayor cantidad de gente a pegatinar, pero sin*

realizar provocaciones. Si había problemas tenían que retirarse porque tenían gente que se iba a encargar". En 1989 el agente 35 era convocado periódicamente para hacer guardia nocturna en el local del Comité Central.

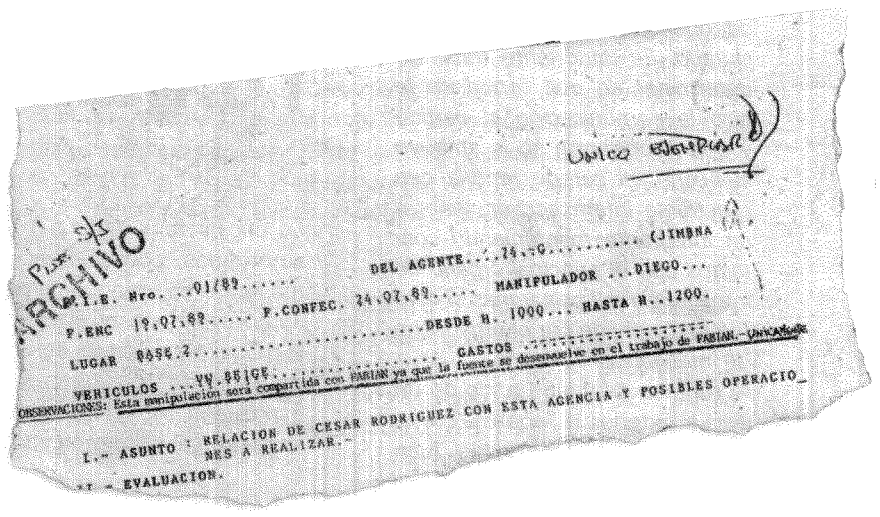
EL CARÁCTER COMUNISTA DE UN ESPÍA. Pero el agente 86 bien pudo ganar el título de súper agente. En enero de 1987 daba a conocer a la "agencia" el informe del Comité Ejecutivo del PCU sobre el referéndum. *"La línea es no embanderar la junta de firmas. Se hablará con un millón de personas. Es algo nuevo para el PCU. Hay que demostrar que el plebiscito no es del MLN. (...) Valenti bajó línea a los secretarios regionales y comisiones departamentales sobre nuevos criterios de propaganda."* En mayo del 88 fue convocado al local central. Su manipulador escribió que *"conversó con Berrutti, secretario del seccional Chávez Sosa,* (quien) *le comentó las negociaciones para formar acuerdos dentro del FA. Entre el PCU, el grupo del diputado Pita, Rodríguez Camusso y Araújo. Berrutti le dijo que se adeudan dos meses del local del Departamental Montevideo y un mes a los funcionarios rentados".* El agente 86 –cuyo encuadre en la estructura del partido no surge de la documentación– informaba a mediados de 1988: *"A Ramón Cáceres, secretario general del Sindicato de la Aguja y miembro del CC, se lo podría separar e incluso expulsar del partido por no ajustarse a la línea y hacer peligrar el dominio comunista dentro del sindicato".*

Sin embargo, poco después, fue citado al local central. *"Víctor Vila le dijo que el partido le había dado conocimientos de propaganda, pero que no estaban conformes con su trabajo."* El agente se hizo una convincente autocrítica: *"No valoró al partido en lo que le podía dar. Vila dijo que no habían perdido la confianza en él como comunista, pero que debía trabajar mucho".*

Aunque Javier Tassino, secretario político del regional 4, lo pasó a la agrupación Julia Arévalo y le dijo que *"había pensado en incorporarlo a la salud porque el MLN está trabajando bien en esa área"*, el agente 86 aportó la lista de afiliados al PCU del seccional Mendiola, con direcciones; informó que un gerente de Phuasa era cotizante del PCU; e identificó a los miembros de seguridad del partido que hicieron vigilancia durante un acto del 9 de julio en 18 de Julio. Por tanto, el informante fue ascendido a responsable de propaganda del seccional 17 (dentro de la Comisión de Propaganda del partido); fue elegido secretario de propaganda de la Coordinadora O del FA; fue elegido como delegado al congreso del FA y, finalmente, como primer miembro alterno, cuyo titular era Errol Gonella (PCU).

La "agencia" no sólo obtenía información; también elaboraba planes para intervenir activamente en operaciones. El agente 32-G informaba el 18 de abril de 1989 que en un edificio de la calle Felipe Sanguinetti *"podrían estar ocultas cuatro o cinco personas escapadas de Argentina. El apartamento sería de un tal Pablo, PCU, de la parte internacional porque viaja a menudo".* El tal Pablo resultó ser Pablo Farías, identificado como participante en el secuestro de un industrial dueño de Championes Seral, que huyó a Argentina, donde habría participado en otro secuestro. El manipulador y sus superiores decidieron *"hacer una inspección de OSE en los 42 apartamentos del edificio".* Confirmaron la presencia de cuatro argentinos que tenían armas poderosas, pero no los ubicaron porque no pudieron acceder a 20 apartamentos en los que no había nadie en el momento de la inspección.

De la misma manera, la obsesión por vigilar más estrechamente a la dirección del PCU llevó a la "agencia" a impulsar a un agente reclutado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia a concretar un acuerdo con el dueño de un apartamento lindero


ARCHIVO
DEL AGENTE...24.-9..... (JIMENA
MANIPULADOR ...DIEGO...
DESDE H. 1000... HASTA H..1200.
GASTOS .....
OBSERVACIONES: Esta manipulacion sera compartida con FABIAN ya que la fuente se desenvuelve en el trabajo de FABIAN.-Oficializ
1.- ASUNTO : RELACION DE CESAR RODRIGUEZ CON ESTA AGENCIA Y POSIBLES OPERACIO
NES A REALIZAR.-
2.- EVALUACION.

con el local del Comité Central del PCU. El agente 48-C había recibido la orden del subdirector de la DNII, Panizzolo, de retomar el contacto con el dueño del apartamento, que pedía, en sustitución, que le alquilaran una casa en un balneario. El agente explicó a la "agencia" que *"quedó todo parado hasta después del referéndum. La fuente dice que el que mandó realizar la gestión fue Panizzolo, pero estima que el verdadero interesado es la CIA".*

A CUALQUIER COSTO. Sin embargo, un objetivo perseguido pertinazmente era infiltrar las direcciones máximas de los organismos espiados. La oportunidad de penetrar en el Comité Central del PCU surgió cuando la "agencia" evaluó conectar a uno de los miembros de un estudio de profesionales, que la inteligencia ubicaba como miembros del Partido Comunista. Tal objetivo surgió mientras los oficiales seguían al coronel retirado Pedro Montañez, preso político junto con el general Liber Seregni y mentor de la logia 1815, que operó en las Fuerzas Armadas en los años sesenta. Montañez había visitado el estudio de los profesionales, lo que avivó el interés de los espías.

Tras una discreta vigilancia, la "agencia" identificó a los profesionales y decidió abordar a uno de ellos, esposo de un miembro del Comité Central del Partido, aun sin saber cuál podía ser la reacción. Sorpresivamente, quien fuera apodado Juan Carlos, agente 02-E, aceptó conversar. En marzo de 1989, un documento de la "agencia" daba cuenta de una entrevista en la que *"la fuente, vinculada a altos dirigentes del Partido"*, dio sus opiniones sobre el referéndum para derogar la ley de caducidad.

Aunque no había sido reclutado, Juan Carlos accedió a comentar: *"El PCU considerará un triunfo si se da una buena votación, aunque no se gane. En cualquier opción, deberá haber una solución política. Para prevenir provocaciones contra los militares acusados, habría que tomar medidas como darles licencia a los oficiales. Piensa que pueden surgir desestabilizaciones".*

En un segundo encuentro, Juan Carlos se mostró reticente a una conversación fluida; dijo que por su trabajo en Punta del Este no estaba al tanto de las cosas. El manipulador pensaba que sí, y proponía presionarlo. Juan Carlos contó que había informado a Edgardo Lanza que *"estaba manteniendo conversaciones con militares por el referéndum".* Y comentó: *"El partido no es tan cuco como lo pintan".*

El manipulador consignó, escribiendo

DE PURA RAZA

En marzo de 1989, la agente 41-G elevó ciertos reclamos para seguir funcionando. El manipulador, "Mauro", apuntó: *"1. Tener un trabajo efectivo en esta agencia (ingresar). 2. Tener cobertura cuando se realicen ciertas operaciones. 3. Viáticos y gastos de representación aparte del sueldo, cuando correspondan".*

El manipulador estampó el siguiente comentario: *"Es una 'currera', podría poner en peligro cualquier misión asignada si no se le 'da con el precio'".* Propuso no aceptar su ingreso: *"No hay que olvidar que el agente es de raza y religión judía y sus principios van primero que los nuestros".*

en tercera persona de sí mismo: *"Existe una posibilidad remota de que Juan Carlos intente reclutarlo. Es importante tratar de determinar de qué forma se le hizo la comunicación al partido y qué importancia se le atribuye al hecho; el partido tendría que mostrarse interesado en tener a un integrante manteniendo contactos con el principal órgano de inteligencia del país y más si éste fue enganchado por el organismo de inteligencia"*.
Al regreso de Juan Carlos de un viaje al exterior, la "agencia" retomó el contacto. Interrogado, Juan Carlos admitió que *"le ocultó al 'Chumbo' Lanza que se trataba de un servicio de inteligencia. Lanza le dijo que si los militares tenían interés de conversar con el PCU, que lo hicieran por los canales oficiales"*. El manipulador propuso que *"si en algún momento se toma esa medida, Juan Carlos debería ser el intermediario"* (para comprometerlo). Y planteó *"hacer un repaso de las actividades desarrolladas por Juan Carlos en el pasado"*.
"La fuente se muestra muy frágil de memoria, probablemente porque no está interesado en colaborar", comentó el manipulador. *"Pero está presionado y no tiene otra cosa que hacer. Se considera que hay que seguirlo presionando y continuar con su historia pasada hasta nuestros días para tratar de evaluar su real ubicación y conexión dentro del PC."*

En sucesivas entrevistas Juan Carlos fue amenazado: *"Tiene que informar sobre las actividades de sus socios en el estudio para no verse envuelto en problemas. Niega mantener contactos con cubanos"*. Los encuentros fueron cada vez más agresivos, y las transcripciones de las conversaciones revelan verdaderos interrogatorios: *"Dice no saber quién es el coronel Montañez. Admite conocer a Luis Echave, 'el Colorado'. Dice que no está afiliado y no cotiza"*.

La "agencia" decidió seguir presionando y mantener una estrecha vigilancia de sus movimientos, a la espera de que surgieran los elementos que explicasen la ambigua conducta de Juan Carlos, que no se rebela frente al acoso, pero que mantiene los contactos. La búsqueda apuntaba a ubicar "algo oscuro" en el pasado de Juan Carlos, más allá de su colaboración durante su detención en la dictadura.
El episodio –cuyo desenlace no se conoce– alecciona sobre los métodos utilizados, una forma más de violencia.

DIEGO EL TELEFONISTA, LA MOMIA Y UN AGENTE DOBLE

La oficina tenía (¿tiene?) una línea telefónica (81 97 22) que nadie, salvo los expresamente autorizados, podía utilizar. El teléfono descansaba en el escritorio, y cuando sonaba, el que respondía bajo ningún concepto debía identificarse como operador del Departamento III.
Junto al teléfono, en el escritorio, un oficial que para sus "fuentes" decía llamarse "Diego" tecleaba la máquina con cierta aprensión. Acababa de escribir el título: *"Relación de César Rodríguez con esta agencia y posibles operaciones a realizar"*. Diego había conocido a Rodríguez, a través de su esposa, en 1987. Nunca hablaron de política, y el oficial dejó de verlo cuando aquel consiguió un trabajo en el supermercado Disco de Pocitos.

"A fines de abril de 1989, este manipulador se encontró en forma casual con Rodríguez, que trabajaba como mozo en un bar de Juanicó y Comercio. Rodríguez le manifiesta su interés de ingresar a la Policía", y se lo planteó porque sabía que Diego era militar, aunque desconocía su rol en la inteligencia. *"Este manipulador mantuvo una charla con el oficial Alem Castro y lo consultó si había la posibilidad de ingreso a la Policía, contestándole que en la DNII había, y que él era el encargado de la parte de los ingresos."* (El policía Alem Castro era conocido también como La Momia, Colina, Oscar 4, en el OCOA, y su nombre real sería Abayubá Centeno). En mayo, Rodríguez tomó contacto con Alem Castro, quien lo presentó en la DNII; ambos ocultaron el vínculo con el manipulador.
En una charla con Rodríguez, el manipulador le explicaba la actividad de inteligencia *"y Rodríguez manifiesta que en el año 85 se había afiliado y militado en la UJC"*. De la "profundización" de ese detalle del pasado de Rodríguez, Diego supo que, en un baile, dos muchachas de la Juventud Comunista reclutaron a aquel pibe de 15 años. *"Fue a fines del 85, me invitaron a un baile unos muchachos de la barra de la esquina, y como yo estaba para hacer esquina y romper los cocos, fui"*, explicó quien a partir de ese momento sería "César" y aparecería en los formularios como agente 17-C.

El manipulador supo que César militó en el Círculo Bantroi y a principios de 1986 llegó a ser secretario de propaganda; que realizó la escuela elemental y la escuela vespertina; que reclutó a su madre para el partido, y a sus dos hermanas y a un primo para la UJC, aunque ninguno de ellos llegó a militar. Cuando regresó al Círculo, por discrepancias con el funcionamiento, se alejó definitivamente.
Para Diego era altamente improbable –y así lo escribió en su informe– que César continuara siendo miembro del partido; descartaba la hipótesis de que fuera un agente del PCU intentando infiltrarse en la inteligencia, por dos razones: *"Que no fue él quien ubicó a este manipulador para pedirle trabajo sino que fue un encuentro casual; y que Rodríguez no tuvo nunca conocimiento de que este manipulador trabajara en un organismo de inteligencia, sabiendo sólo que su destino era el Comando General del Ejército"*.
A esta altura, Diego llegaba al punto crucial de su informe. ¿Qué operaciones realizar con Rodríguez? Por un lado, el manipulador *"estima que no hay inconveniente en que en esta etapa informe de las actividades de la DNII"*. Pero, además, *"el hecho de que C Rodríguez haya militado en la UJC permite la posibilidad de que la Juventud Comunista lo utilice como infiltrado dentro de la DNII"*.

La creación de un doble agente era, para Diego, una *"operación delicada y riesgosa"* que *"requiere un máximo de compartimentación"*. Después de una conversación con el oficial Alem Castro, se decidió no comunicar la operación a los superiores de la DNII *"porque no ofrecen garantías de compartimentación"*, de modo que *"en una primera etapa sería conveniente mantenerlo en secreto para la DNII"*.
Para el oficial de inteligencia, la transformación de César en un agente doble suponía la concreción de dos objetivos importantes: *"Se tiene conocimiento fehaciente de que dentro de la DNII hay un infiltrado (de nivel no detectado) perteneciente al PCU. En la medida que C Rodríguez pueda desarrollar su papel de agente infiltrado del PCU le puede posibilitar que tome conocimiento* (de) *quién es esa otra persona"*.

Y el segundo objetivo: *"Detectar cuáles son los intereses que tiene el PCU en base a las solicitudes de averiguación que se le hagan a C Rodríguez, así como también la forma en que está operando el aparato de inteligencia del PCU"*.
Al terminar de teclear, el informe de Diego era como esos espejos enfrentados que reproducen una imagen hasta el infinito. Estaba tan absorto en las posibilidades de aquel juego a tres bandas que mecánicamente atendió la llamada del 81 97 22. Era la madre de "Lucía": *"Dejen de molestar a mi hija"*. Lucía era la antigua agente 84, cuyo contacto se había debilitado y, a instancias de "Guillermo", jerarca de la "agencia", varias funcionarias habían llamado a su domicilio, sin suerte, para reengancharla. Lucía había dejado de espiar porque tenía un novio celoso. La madre había advertido: *"Si siguen llamando, voy a pedir a ANTEL que intervenga mi teléfono"*.
Había agentes y agentes, seguramente concluyó Diego.

Foto: Archivo

LA INFILTRACIÓN EN EL MLN Y EL FRENTE JUVENIL

DESDE TRISTÁN NARVAJA CON AMOR

Por razones obvias, la inteligencia militar multiplicó el espionaje a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales ante la inminencia del referéndum que resolvería sobre la vigencia o la anulación de la ley de impunidad, que protegía a todos los militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Sin embargo, la línea estratégica del espionaje "clandestino" (en la hipótesis de que tal actividad no estaba autorizada u ordenada por los ministros de Defensa Nacional de los gobiernos democráticos) miraba mucho más allá de la consulta popular. Los documentos de la "agencia" –como gustaba llamarse a sí misma– revelan planes más permanentes en el control militar de la actividad ciudadana, como si la inteligencia tomara distancia de la suerte de los impunes. Así, un documento elaborado a comienzos de abril de 1989 por el oficial de inteligencia que manipulaba al "agente 21" *"sugiere luego del 17 de abril realizar una operación a la Comisión Pro Referéndum con la finalidad de hurtar toda la documentación del referendo, específicamente el relevamiento en Montevideo y en el Interior. Con ese relevamiento tendríamos nombres, direcciones y números de teléfono y vehículos de algunas personas. La información supuestamente también le tocaría a los movimientos y partidos que apoyan al plebiscito"*.

La existencia de listas, y ubicaciones en planos, de militantes pro-referéndum y de posibles votantes del voto verde quedó confirmada después de que el agente 21, cuyo seudónimo era "Pancho", informó sobre *"Reunión en la casa de Andrés Dorta por movilización en el referéndum. Se discutió cuándo se devolvía un material de la Comisión Pro Referéndum que estaba en poder del grupo de Manito Hernández"*, del Zonal 3 del MLN. La "agencia" solicitaba el relevamiento del local central del voto verde y una eventual copia de las llaves de las puertas de entrada. Tenía varios agentes infiltrados en los organismos de propaganda del MLN y del Partido Comunista.
La búsqueda generalizada de información sobre ciudadanos no se limitaba a partidos de izquierda ni a sindicatos, como lo revela un informe de un funcionario reclutado en la aduana, que prometía información sobre *"políticos involucrados en tráfico de drogas"*. La recopilación de información alcanzaba incluso a los familiares de los militantes espiados: tal el caso de Karina, integrante de un grupo de ingreso al MLN, aparentemente dispuesta a *"desertar y vincularse con el Frente Juvenil"*. El 1 de mayo de 1989 el agente 21 *"pasa información sobre Karina (posible deserción hacia el Frente Juvenil). Trabajo: Consejo del Niño. Grupo familiar: su madre (hay fotografía), dos hermanos (hay fotografías), dos hermanas pequeñas, un hermano que vive en Durazno. Padre fallecido"*.

La información recopilada se multiplicaba con los nombres y direcciones de los propietarios de vehículos (obtenidos en la Intendencia) que habían sido identificados en locales partidarios, y de las personas que concurrían a los domicilios de algunos espiados. (Por ejemplo: *"9-7-88. El agente 35 detectó el auto matrícula 215.561 estacionado frente al Zonal 5, habiendo descendido del mismo un NNM que permaneció por espacio de 20 minutos en el zonal"*. A mano se agrega: *"Fiat 147 año 81, propietario Darío Barrere, s/ant, domicilio H Quiroga 6464".)*
El carácter estratégico de la obtención de información se revela en la comunicación de un agente que espiaba, para la "agencia", a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (de la Policía): *"El agente 59-G (de la DNII) consigna que 'estamos abocados a organizar un trabajo conjunto con el capitán Sequeira (Factor Militar), el cual consistirá en el relevamiento del MLN y PCU (organización, locales, etcétera). En el mismo se enlazarán los conocimientos volcados por el agente y los del Factor Militar'"*. No se especifica si el capitán Sequeira trabajaba en el Departamento 3 de la dirección de inteligencia militar.

A TODOS LOS NIVELES. La documentación revela que cualquier nivel de militancia podía ofrecer información relevante sobre los círculos de decisión de las organizaciones espiadas, y que la "agencia" contrastaba las afirmaciones de diferentes agentes sobre un mismo tema. Así, un comentario estampado por el manipulador "Mauro" sobre el Frente Juvenil del MLN confirma: *"la información concuerda con otros informes producidos por agentes de esta agencia"*.
Para la inteligencia, aparentemente, revistaba la misma importancia la información sobre opiniones de dirigentes que la identidad de quienes estaban dispuestos a ingresar en el MLN, o la de aquellos "tupas" que no habían sido detectados hasta ese momento. El agente 35, cuyos contactos con su manipulador se realizaban invariablemente en la plaza Lafone o en Carlos María Ramírez y Rivera Indarte, reproducía una charla con Héctor Figueroa, alias "Mafalda", del Zonal 5 del MLN, quien pretendía *"conversar con los dirigentes del seccional Mendiola, del PCU, para coordinar la utilización de los muros para pintadas durante octubre"* de 1988; y a la vez identificaba al *"cura Juan Carlos, de la parroquia Sagrada Familia (Carlos María Ramírez 677), posible MLN"*.
De orejas atentas, el agente 35 registraba cualquier comentario cuando asistía al Zonal 5, en ocasión de actos y reuniones abiertas. *"La fuente escuchó a Carlos Cejas decir que Pepe Mujica tiene a su cargo una chacra que se dedica a la venta de flores en Pajas Blancas, cerca de Camino Tomkinson"*. Y estaba al tanto de cualquier movimiento en la "Base Pinela", en la calle Heredia: *"15-4-85. Agente 35 informa que varios patrulleros rodearon el local del Zonal 5 del MLN en La Teja y detuvieron a una persona que estaba en el interior del local"*. El manipulador "Diego" corroboró la información, obteniendo el parte policial: *"El detenido es Ramón Moreira Molina, teniendo antecedentes por pertenecer a la columna 70-MLN, y estuvo preso entre 1972 y 1980"*. El manipulador pidió planos detallados del local y relevamiento de domicilios de integrantes del MLN.

El agente 21, "Pancho", tan activo o más que el agente 35, no se reservaba ningún dato: *"García Rivas, ex fotógrafo de la compañía de contrainteligencia, estaría viviendo en Buenos Aires en el hotel Congreso, en la habitación 17. La información se extrae de una conversación informal entre dos NNF, integrantes del MLN, en el bar Roma"*, en octubre de 1988; seis meses después informaba que *"en Jaime Zudáñez 2525 habitan dos NNF (femenino) y un NNM (masculino) integrantes del MLN. Una sería Inés, alias La Flaca, delgada, ojos claros, presencia muy bonita. Otra: cabello rubio, largo, usa lentes, posiblemente maestra. Él: aparentemente su nombre sería David. En la casa tienen libros, librillos y diarios referentes a su movimiento"*.
El activo agente 21 finalmente dejará pistas que facilitarían su identidad: *"Agente 21. Concurrió a un acto del PVP en el club Platense. 700 personas, en su mayoría del MLN, debido a que identificó al 80*

por ciento de los concurrentes, ya sea por amistad, por conocimiento visual y del penal". En 1989 se ofrecía a fotocopiar unos documentos obtenidos en el Zonal 3 porque *"Al lado de mi casa hay un quiosco, al lado del* (liceo) *Logosófico, que hace fotocopias"*. El agente 21 fue (¿es?) uno de los espías que con mayor rigor consignaba nombres y domicilios de jóvenes aspirantes a tupas que manifestaban su adhesión a la lucha armada. Si seguían activos los antecedentes –que supuestamente debían haberse borrado– de los ex presos políticos, por ahí permanecerán los antecedentes de los antiguos integrantes de los grupos de ingreso y los del Frente Juvenil.

El agente 21 fue uno de los espías que con mayor rigor consignaba nombres y domicilios de jóvenes aspirantes a tupas

"ULTRAS" Y "QUIETISTAS". Este espía, que en las conversaciones con su manipulador (prolijamente desgrabadas) se definía como *"anarco independiente"*, parecía motivado por un excesivo celo: *"Informa que Carlos estuvo conversando con Alejandro del Frente Juvenil. Carlos dijo que 'el Frente canaliza todas mis inquietudes fierreras y estoy muy afín en todo'. Hoy cree más que nunca en el foquismo"*. "Mauro", el oficial que atendía a "Pancho", comentaba: *"esto nos da la pauta de un inicio revolucionario a nivel juventud del MLN"*.
Por sus vínculos en el Zonal 3, el agente 21 proporcionó a la "agencia" información y comentarios sobre la relación entre el MLN y el Frente Juvenil, que llevaron a su oficial responsable a opinar: *"El Frente Juvenil tendría que ser en estos momentos objetivo muy importante a tener en cuenta en la estrategia del año que cursa –hablando de esta agencia-)"*. Los informes de "Pancho" referían a deserciones en grupos de ingreso, que sólo en el Zonal 3 eran unos 20, de unos 15 integrantes cada uno. La "agencia" concluía que *"el Frente Juvenil tiene discrepancias con la vieja dirección, a tal punto que se podría hablar de una fisura dentro del movimiento. El Frente realiza reuniones paralelas sin conocimiento aparente de la dirección"*. En las discusiones del Zonal 3 los jóvenes, calificados de "ultras", se oponían a los "quietistas" de la dirección, *"que no quieren hacer olas para ver cómo le va al MPP en las elecciones"*.
Ya en febrero de 1989, el agente 21 resumía las discusiones con los grupos de ingreso en el Zonal 3, y en particular *"una discusión que dirigió el 'Curita' Villanueva, sobre lucha armada"*, donde las bases reclamaban definiciones más explícitas de la dirección. Aquellas diferencias que mantuvieron algunos militantes del Frente Juvenil no impidieron que accedieran a puestos de gobierno en la presidencia de José Mujica.

PERFORANDO LA SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN. La "carrera" del agente 21 tendría otro impulso cuando fue seleccionado para militar en el sector Propaganda, tal como lo venía haciendo en el Zonal 3. *"El Curita embaló al 'Mono' Herrera y a Carlos Casares para discutir el tema de la propaganda. El dirigente máximo de propaganda es José Mujica, después Carlos Casares, que es responsable de propaganda central."* Una relación con Casares era una oportunidad para penetrar a nivel central. La "agencia" lo presionaba para que se reuniera con Casares, y "Pancho" le reclamaba al Mono Herrera la necesidad de discutir criterios. Finalmente el Mono, Casares y el agente 21 tuvieron una primera conversación en el bar de Colonia y Rondeau, donde prácticamente no concretaron nada por la muerte inesperada del padre de un integrante del Comité Central. Para entonces, con la cobertura de Propaganda, el manipulador "Mauro" ordenaba al agente 21 *"concurrir a la casa de Manito Hernández a efectos de obtener información sobre la llegada del cuerpo de Raúl Sendic; mantener a la brevedad una charla con el Cura Villanueva a los efectos de obtener información de su viaje; y tratar de obtener documentos de la escuela de capacitación propuesta por el grupo del Cura y el Mono"*.

Simultáneamente, la "agencia" ensayaba otras vías de acceso a la dirección del MLN. Una de ellas fue la infiltración en el quincenario *Mate Amargo* (véase recuadro) y otra fue la instalación de un puesto de vigilancia permanente de los movimientos que sucedían en el local central de la calle Tristán Narvaja. Por informaciones de los espías infiltrados en Por la Patria y el grupo de Juan Raúl Ferreira, la "agencia" accedió a un militante del Partido Nacional, dueño de una librería ubicada exactamente junto al (o enfrente del) local del MLN.

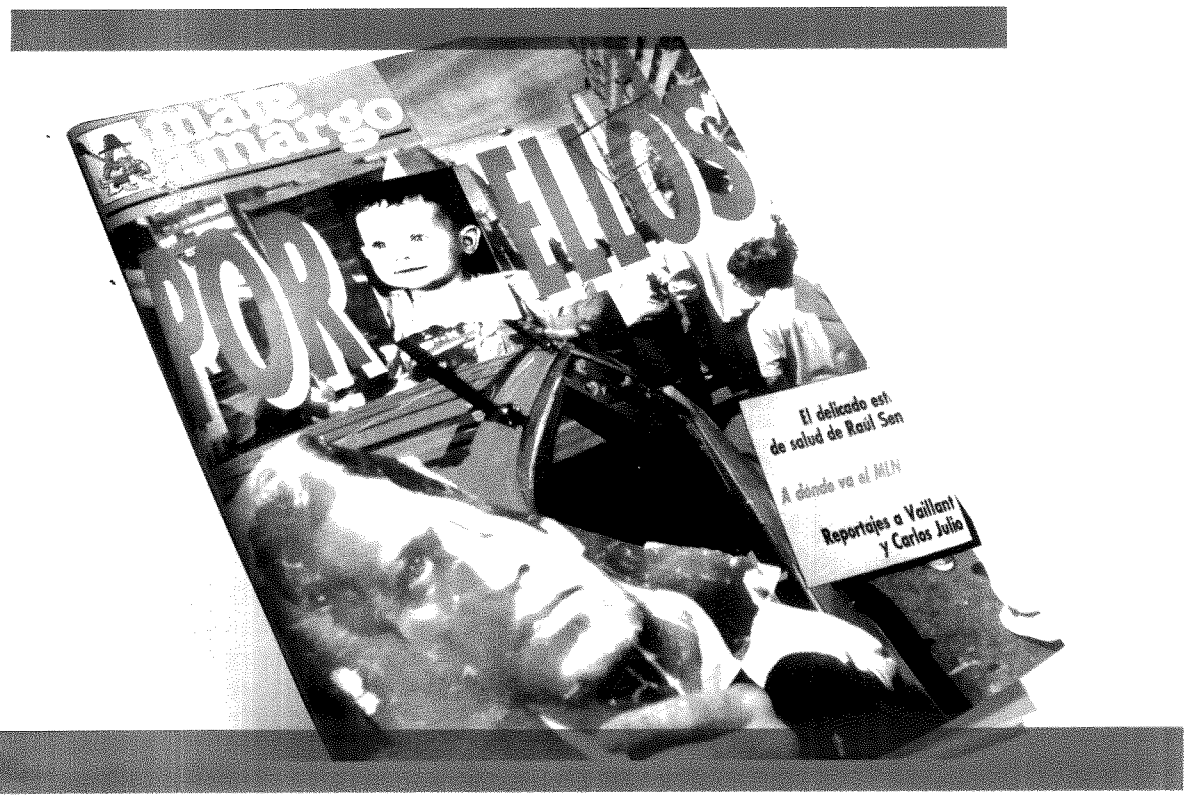
Bautizado como "agente 60-G", los oficiales de inteligencia le propusieron al librero encargarse de la vigilancia del local partidario, pero el vendedor de libros sugirió que, en su lugar, se podría edificar una pieza en la azotea desde donde mantener la vigilancia permanente. Por una razón de *"suma importancia"*, la agencia pidió autorización para instalar una vigilancia por dos o tres días en la azotea, enviando a sus agentes con la cobertura de un trabajo de impermeabilización. Después, se acordó con el librero instalar dos agentes como empleados de la librería que se dedicarían a vender libros en la vereda. Los documentos no consignan el resultado de tales vigilancias; en cambio se consignó que una "atención" (una botella de whisky y unos bombones) insumió 5 mil pesos.

LUCHA POR LA SUCESIÓN. En el período que llega hasta las elecciones de noviembre de 1989 el máximo éxito del espionaje al MLN fue la ubicación de dos agentes, uno en el entorno de los familiares de Eleuterio Fernández Huidobro, y otro en el entorno de Julio Marenales. No se sabe cuáles fueron los argumentos para reclutar a un familiar político del Ñato. En todo caso, el agente 66-G concurría periódicamente al domicilio de la hermana del Ñato, Emilia Fernández Huidobro, y todas las manifestaciones de tipo político que lograba oír eran puntualmente trasmitidas a su manipulador; cuando su precaria salud se lo impedía, era su esposa quien se encargaba de espiar. Así, pudieron informar que desde la vivienda de Emilia se hacían frecuentes llamadas telefónicas a Cuba, Nicaragua, Suecia, Argentina y Brasil, y que para esas llamadas visitaban la casa diversas personas.

El agente recibió estrictas directivas de nunca formular preguntas sobre el MLN en reuniones familiares, y de limitarse a escuchar. En una de esas reuniones, el Ñato comentó que estaba molesto por unas declaraciones de Julio Marenales y de Luis Rosadilla. Ante la inminencia de la muerte de Raúl Sendic, el 26 de abril el manipulador consignó que el agente 66-G *"cree que habrá una disputa por el poder y que ganará el Ñato"*. La hermana de Fernández Huidobro le comentaba a la esposa del agente su molestia por la decisión del MLN de no aportar nombres a las listas del MPP. Una información sobre una inminente operación que la hija de Fernández Huidobro debía realizarse en el Sanatorio Americano, a un costo de 500 mil pesos, *"resulta irrelevante a los efectos prácticos para esta agencia"*, pero se preguntaba *"de dónde sacará el Ñato ese dinero"*.

En 1989 el máximo éxito del espionaje al MLN fue la ubicación de dos agentes, uno en el entorno de Huidobro y otro en el de Marenales

Mientras, el espionaje sobre Julio Marenales fue un logro del incansable (y ubicuo) agente 21, "Pancho", quien ya había informado sobre las opiniones del "Viejo" en sus discusiones con miembros de los grupos de ingreso. La oportunidad de una relación más estrecha surgió, imprevistamente, de una propuesta del director de la Escuela de Bellas Artes, Jorge Errandonea, quien le comentó al agente 21 su intención de utilizar dos cargos docentes para designar a Julio Marenales y al propio agente, de lo que se deduce que éste mantenía un vínculo con Bellas Artes. "Pancho" se comprometió a ubicar a Marenales para trasmitirle el ofrecimiento. Cuando logró ubicarlo, Marenales se mostró interesado, e invitó al agente 21 a su casa (una carpintería en el Buceo) para conversar más extensamente. La transcripción del relato de esa conversación revela que, más allá del interés pero el escaso tiempo con que contaba, Marenales (*"no fuma, no bebe, es muy meticuloso y ordenado y tiene una buena relación con su compañera"*) hablaba poco, escuchaba mucho y permanentemente registraba los gestos y reacciones de su interlocutor. El agente 21 informaba que él había acaparado la conversación, contando todo su pasado de "anarco independiente" y sus frustraciones militantes. "Pancho" consignaba que Marenales coincidía con él en que la propaganda del MLN *"era un desastre"*.
En el interrogatorio de su manipulador, el agente 21 debió de ser ambiguo:
"—¿Está en la pesada?
—Me parece que sí.
—¿Es pro chino?
—No creo.
—¿En qué quedaron?
—Que le voy a diseñar un guardarropas a su esposa".



OBJETIVO "MATE AMARGO"

UN AGENTE EN LA REDACCIÓN

"Salvador", el agente 07 de la inteligencia militar, tuvo una accidentada relación con la "agencia", por lo que, quizás, no accedió al círculo de privilegio de los "doble cero" vernáculos. Por razones que no se explican, "Salvador" conocía la verdadera identidad de "Guillermo", el jefe de los "manipuladores" (oficiales de inteligencia) que atendían personalmente a los infiltrados. Lo que atrajo el interés de la "agencia" fue que "Salvador", sin ser parte orgánica de *Mate Amargo*, el quincenario del MLN, entraba a diario en la redacción, era conocido por quienes allí trabajaban, y ocasionalmente publicaba fotos, en su trabajo de *free lance*, tanto allí como en el diario *La República*.

Para la "agencia" también tenía su interés el vínculo que "Salvador" mantenía con Mario Rossi, dirigente del Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), en cuyo local llegó a vivir y donde se enteraba de la ayuda económica que ese grupo recibía de Alemania.

En sus encuentros con "Mauro", su manipulador, "Salvador" logró negociar ventajosamente los términos de su contrato de espía, primero recibiendo dinero *"por resultados"*, cuando entregaba fotos de manifestantes y militantes sacadas en actos y concentraciones (*"¡no me traigas fotos panorámicas!"*); después, obteniendo ayuda para comprar rollos y papel fotográfico, y finalmente acordando un sueldo mensual de 85 mil pesos.

La mensualidad coincidió con el interés de la "agencia" por *Mate Amargo*, sus actividades y su computadora. *"Salvador"* había informado que *"en Mate Amargo existen tres líneas: la de Picardo y Sendic, la de Fernández Huidobro y Canalda, y una ultra de Zabalza, León Dutter y Quico Suárez"*. En sucesivas entrevistas, "Mauro" y "Guillermo" canalizaron su interés hacia el quincenario y la forma en que el infiltrado se movía en la redacción y en el edificio donde también operaba el Comité Central del MLN. "Salvador" explicó que en *Mate Amargo* había una computadora en la que se armaba el periódico y además se guardaba material interno del MLN. Dijo que él había trabajado en esa computadora, que no tenía claves de acceso. "Salvador" apuntó que en el segundo piso había otra computadora, pero que él nunca había tenido oportunidad de ingresar a su disco duro. Explicó que al principio le habían pedido ayuda por sus conocimientos de computación y después siguió accediendo a la máquina "de abajo" porque trabajaba sus fotos en pantalla. *"¿Si tengo acceso ahora? No, no tengo"*, pero eso no era un problema, porque todo lo que había allí estaba respaldado en pequeños disquetes. *"Las cajas de disquetes están ahí nomás, casi al entrar"*, señaló, y también que se pueden robar en lugar de entrar en el disco duro. *"¿Si yo puedo robar los disquetes? Sí puedo, pero no puedo determinar la importancia de las cosas que me llevaría."* "Guillermo" tuvo una idea. *"¿Y si nosotros entramos y las robamos?"* "Mauro" le preguntó si había conexión entre las dos computadoras, *"no sea cosa que entremos en una y salte la alarma en la otra"*. "Salvador" explicó que no, porque se habían traído de Suecia dos módems que no eran compatibles.

Para robar en *Mate Amargo* era necesario obtener las llaves de entrada. *"No es problema, están colgadas en una pared y puedo tomarlas en los momentos de actividad pico"*, dijo "Salvador". *"Sacamos una copia en plasticina y las devuelvo. Son cerraduras Yale sin trancas"*. "Guillermo" exclamó: *"¿Tan regalados están?"*. "Mauro" no estuvo de acuerdo. Las copias no funcionaban; había que llevarlas a una cerrajería y hacer un duplicado. "Guillermo" acotó que debían probar las llaves antes de entrar. *"¿Queda gente de noche"?* "Salvador" explicó que después del "cierre" de la publicación no quedaba nadie los jueves. Las directivas fueron: sacar las llaves, sacar fotos de las instalaciones de *Mate Amargo* y hacer un informe de la rutina.

Pero el proyecto no se concretaba, y los manipuladores comenzaron a presionar a "Salvador". El infiltrado daba excusas por el atraso en sus tareas. Para las llaves, siempre hubo alguna razón que le impedía sacarlas; las fotos prometidas no llegaban porque no tenía dinero para comprar el papel fotográfico. Se le encomendó, el 16 de abril, concurrir al local donde Gavazzo debía votar, para fotografiar a eventuales alborotadores, y dijo que no sabía dónde votaba el teniente coronel; "Guillermo" le dijo que le daría el soplo por teléfono, y "Salvador" se atajó: *"Si va a haber lío, ustedes me dan una cámara, yo no voy con la mía"*. En varias ocasiones "Salvador" faltó a los contactos.

Una noche el infiltrado anunció que no podía concurrir porque tenía que sacar unas fotos para *La República*, pero "Guillermo" casualmente se lo cruzó en la calle. *"¿Qué hacés aquí, no era que tenías que trabajar?"* "Salvador" pretendió reclamar su *"derecho a tener vida privada"*. "Guillermo" le advirtió: *"Con nosotros no se juega"*. Inconvenientes de ser mercenario.

Foto: Archivo ACAR.

UNA BATALLA ENTRE LA CIA Y LA INTELIGENCIA MILITAR POR EL ESPIONAJE DEL PARTIDO COMUNISTA

A VARIAS BANDAS

La estación de la CIA estadounidense en Uruguay tenía en nómina a por lo menos 37 funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los que pagaba mensualidades de entre 250 y 1.000 dólares por una colaboración permanente. En la nómina figuraban, además de personal de Protocolo de la cancillería, el inspector Máximo Costa Rocha, el comisario Panizzolo, el subcomisario Moll, el oficial Del Rivero, el "Caballo" Vaz, y Javier Ledesma, alias "Condorito", que oficiaba de enlace de la CIA con las autoridades de gobierno y de la Policía. Los citados policías de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) fueron simultáneamente, a mediados de 1989, informantes pagos de la inteligencia española, a partir del momento en que se confirmó la presencia en Uruguay de ciudadanos vascos requeridos por su presunta participación en la ETA. Las relaciones policiales con organismos extranjeros eran monitoreadas por Walter Nessi, prosecretario de la Presidencia en la primera administración de Julio María Sanguinetti.

Los detalles del funcionamiento de la CIA en los meses previos a las elecciones de 1989 están consignados en por lo menos 20 documentos de la inteligencia militar a los que accedió **Brecha**. Dichos informes dan cuenta de una verdadera historieta de espías, en la que agentes estadounidenses y su "residente" local, identificado como el "Facha" Ramírez, presuntamente ex policía, presionan a los responsables de la inteligencia policial para sabotear un operativo de infiltración al Comité Central del Partido Comunista, que desplegaba el Departamento III de la Dirección Nacional de Información de Defensa. En este *ménage à trois* entre la Compañía, la DNII y la DGID, la CIA pretendía tener la exclusividad del manejo de un miembro del PCU que había sido conectado anteriormente pero que en 1989 colaboraba con la inteligencia militar.

Los detalles del funcionamiento de la CIA en la previa de las elecciones de 1989 están consignados en por lo menos 20 documentos a los que accedió ***Brecha***

JUEGO DE ESPÍAS. "Diego", un "manipulador" de la DGID (que inopinadamente se descompartimentó como oficial del arma de Ingeniería y propuso *"barrer con buldozers a toda la DNII y construir de nuevo"*) mantuvo, entre febrero y agosto de 1989, entrevistas bisemanales con "Fabián", un funcionario del Departamento de Análisis de la DNII que en el archivo de la agencia figura como "agente 53-G". Por lo menos desde 1980, Fabián fue informante a sueldo de la CIA, pero en 1987 abruptamente prescindieron de sus servicios, con lo que sus ingresos cayeron significativamente, hasta que fue reclutado por la inteligencia militar.

En su calidad de doble agente, Fabián entregó a su manipulador militar un contacto con un escribano, miembro del Partido Comunista, a quien el Departamento III bautizó como Juan Carlos. La relación del agente Fabián con Juan Carlos databa del momento en que éste fue detenido por la DNII en una de las oleadas de

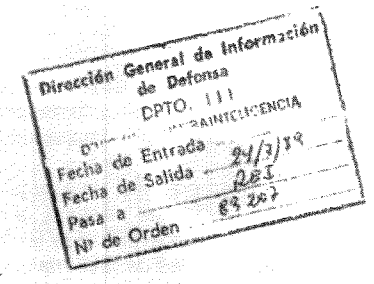
represión al Partido Comunista durante la dictadura.
La "manipulación" de Juan Carlos por la agencia militar fue un tanto borrascosa, en la medida en que los oficiales presionaron excesivamente al comunista quien, al parecer, tenía acceso a información de la interna del Comité Central. Sin llegar a romper el vínculo, Juan Carlos era reacio a brindar información, aduciendo que no era un militante muy enterado. Mientras por un lado los oficiales montaron toda una vigilancia en torno a Juan Carlos y establecieron seguimientos, por otro apelaron a Fabián para recomponer el vínculo. Fabián tuvo una entrevista con Juan Carlos en la que lo conminó a ser más específico en su colaboración

A su contacto en la DGID, Fabián explicó que el talón de Aquiles del escribano era la "garantía" que dos coroneles, Klastornic y Donaldo, dieron ante el juez militar para obtener la libertad de Juan Carlos. Fabián también informó que en la entrevista le había dicho a Juan Carlos que a partir de entonces tenía que asegurar su "seguridad", para el caso de que el partido conociera sus contactos; le dijo que los militares le daban esa seguridad. Sin embargo, Juan Carlos optó por informar a un miembro de la dirección del partido que la inteligencia militar lo había consultado sobre las posibilidades de la derogación de la ley de caducidad en el referéndum; y de la misma forma, le avisó a Fabián que había tratado de blanquear esa relación.
Fabián comenzó a tener problemas en la DNII, a pesar de que no había ocultado que mantenía vínculos con la inteligencia militar. Primero fue el subdirector de la DNII, el comisario Panizzolo, quien le preguntó si seguía viendo al escribano. *"Vos hacé lo que quieras* –le dijo– *pero yo no quiero saber nada porque ese asunto está muy manoseado"*, refiriéndose a que anteriormente había estado en manos de la CIA.

Y una mañana de mayo de 1989, el director de la DNII, Costa Rocha, le advirtió a Fabián que el escribano era un doble agente y que no debía verlo más. Costa Rocha le dio a entender que sabía que el escribano tenía vínculos con la inteligencia militar, y que había dado cuenta de esos contactos a la dirección del partido. Fabián le preguntó si la información provenía de dentro del partido y Costa Rocha le confirmó que era una *"fuente muy segura"*, pero después se supo que el origen de la información era la propia CIA. Pese a la orden recibida, Fabián se negó a abandonar el contacto con el escribano y, como explicó más tarde a su manipulador Diego, no temía sanciones o represalias porque *"conozco todas las historias sucias de ahí adentro"*. En su evaluación, Fabián concluyó que la afirmación sobre el carácter de doble agente de Juan Carlos era una maniobra para indisponerlo con la inteligencia militar, al haberle pasado un contacto que supuestamente podría abrir la puerta para una penetración de la inteligencia del Partido Comunista en la DGID. Diego le recordó que esa había sido una hipótesis no descartada por la agencia, pero Fabián argumentó que todo era una maniobra de la CIA para retomar el control exclusivo del manejo del escribano. En ese momento Fabián entregó una carpeta con memorandos y desgrabaciones de las conversaciones que los agentes de la CIA habían mantenido con Juan Carlos. *"Yo historié todo el proceso de este asunto muy mal manejado a los dos gringos que estuvieron responsables aquí en Montevideo"*, explicó Fabián.

LA CIA SE REPITE. Pese al evidente resentimiento por haber sido "despedido" de la CIA, la inteligencia militar no cuestionó la información que aportó Fabián sobre la actuación local de la agencia estadounidense. Detalló que el Facha Ramírez era el residente de la CIA, cuya función es la de *"un administrador"*: paga sueldos, sugiere compras y decide quién recibe qué beneficio, un viaje para la familia o una recompensa extra. *"Yo le dije, ahora cuando me encontré con él en la Dirección e intentó que volviera a trabajar para la CIA, que yo no me olvidaba de lo que me habían hecho.*
Y no me olvidaba de los sobrecitos con el dinero y con los nombres." Fabián informó que el enlace de la CIA con la Policía era Javier Ledesma, alias Condorito, *"amigo íntimo del inspector Costa Rocha y amigo también de Walter Nessi"*. El entonces prosecretario de la Presidencia tenía, según el agente 53-G, un grupo del que era parte Condorito. El prosecretario era quien administraba todas las relaciones con todas las agencias extranjeras: *"Nessi era el que decidía qué cosas se les decía y qué cosas no"*. A través del Ministerio del Interior, Nessi tenía contactos con iraníes, con la derecha peronista, con la inteligencia española, además de la CIA. El grupo de Nessi, según las afirmaciones de Fabián, se desmembró porque el prosecretario *"cayó en desgracia"* en el último tramo del período de Sanguinetti.
La CIA privilegiaba la relación con el Ministerio del Interior y rechazaba la relación con el Ejército. Fabián atribuía al Facha Ramírez la afirmación de que *"somos antimilitaristas"* y que eso explicaba por qué la CIA quería excluir a la inteligencia militar del operativo sobre el escribano comunista.
Según Fabián, el director Costa Rocha secundaba todas las indicaciones que habitualmente recibía de la CIA por intermedio del Condorito Ledesma. Pero los sueldos que pagaba la CIA eran fijados por el Facha Ramírez y el criterio del monto no estaba dado por la jerarquía del funcionario sino por su trabajo de campo y su antigüedad en la relación; algunos no recibían sueldos, pero obtenían regalos: surgían viajes para sus familias o ayuda para adquirir viviendas. Fabián aseguraba que el Facha había adquirido una casa en España, a donde pensaba retirarse. El Departamento III de la inteligencia militar especulaba que la DNII podía tener un infiltrado al máximo nivel en el Partido Comunista, aunque su agente 53-G decía que no había evidencia informativa de tal infiltración: él no había escuchado nada que confirmara esa hipótesis, por más que lo sugería el propio director Costa Rocha. Los documentos tampoco aportan una resolución a la incógnita de si Juan Carlos era o no un doble agente. El manipulador Diego y su supervisor "Guillermo" se inclinaban a reconocer que el Partido Comunista había desarrollado un eficiente aparato de inteligencia, lo que los obligaba a aplicar un tamiz fino sobre cualquier información que la inteligencia militar recibiera de las docenas de agentes infiltrados, a nivel central del PCU, de su estructura zonal o de los sindicatos.

La CIA privilegiaba la relación con el Ministerio del Interior y rechazaba la relación con el Ejército



UNA CONFESIÓN

Si finalmente accede a los documentos del espionaje militar en democracia, la comisión investigadora que la Cámara de Diputados está a punto de nombrar, bien puede rastrear el documento P.I.E. 14/89, redactado el 22 de mayo de 1989, que transcribe la conversación entre el oficial Diego, del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa, y el agente 53-G, alias Fabián. Este agente, funcionario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, relataba el tenor de una conversación que mantuvo con un agente de la CIA en Uruguay, el Facha Ramírez.

—Yo no maté gente por satisfacción propia –cuenta Fabián que le dijo al Facha–. Y a vos te consta, porque salimos juntos, estuvimos juntos enterrando gente, ¿o no?
—Sí, pero eso fue una cagada –dijo el Facha.
—Y bueno, si vos te olvidaste de eso, yo no me olvido, porque yo no lo hice con satisfacción y vos tampoco. Hubo una diferencia: yo no me mamaba después de hacerlo. Yo pensaba que teníamos que trabajar de otra manera para evitar llegar a eso. Insistí y te rompí las bolas durante años de que formáramos un equipo de gente para que mañana, de diez tipos, tuviéramos que matar a tres para obtener información.

No sería difícil identificar a Fabián, en especial porque en cierto momento de la desgrabación parece referirse a sí mismo por su nombre y apellido al recrear una conversación de una tercera persona.

UNA PROFUNDA INFILTRACIÓN EN VARIADOS SINDICATOS

EL ESPÍA COMPAÑERO

El Departamento III (Operaciones) de la Dirección General de Información de Defensa –la inteligencia militar– estaba decidido a "plantar" un espía dentro del puerto de Montevideo y en especial entre los "ultras" (léase MLN) del sindicato portuario. A mediados de 1989 la "agencia" concentraba en la vieja casona de la calle Monte Caseros una abundante y diversificada información del ámbito sindical pero, más allá del infiltrado en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, pretendía una "línea directa" con los sindicatos más activos, aquellos con capacidad de incidir en la vida política y económica del país: bancarios, transporte, ANCAP, UTE, ANTEL, bebida, metalúrgicos y, por supuesto, portuarios, donde los primeros pujos privatizadores habían desencadenado conflictos y movilizaciones.

El documento titulado "Planificación de objetivos" ordenaba *"reclutar una persona, la cual tenga acceso a información sobre las actividades izquierdistas dentro y fuera del puerto de Montevideo"*. Además de revelar el nombre del candidato, el texto alecciona sobre las formas de reclutamiento y las evaluaciones.
M C G, un funcionario de la Administración Nacional de Puertos que trabajaba en el remolcador Artigas, fue recomendado por otro infiltrado, el "agente Jaime", viejo conocido de M. Una primera fase, de obtención de datos, confirma que es casado, tiene una hija de 17 años, *"tiene acceso a las actividades de los sectores izquierdistas dentro del puerto de Montevideo y fuera de éste"*. Una segunda fase revela que en los años 68-69 *"trabajó como informante para la embajada americana por intermedio de míster Rubinstein. El citado informaba sobre el MLN-T"*. M era amigo del coronel Nelson Costanzo, quien logró reponerlo en la ANP después de que el coronel Ramírez lo despidió por un reclamo laboral (un coronel Ramírez presidía la ANP a finales de los setenta).

Una tercera fase, de captación, comenzó después de tomar contacto *"con la mencionada persona, la cual se ofrece a colaborar con la agencia"*. El documento evalúa que la *"mencionada persona, debido a sus ansias por colaborar, es de fácil manipulación. Mentalmente es una persona a la cual las exigencias de esta Agencia no la afectan en absoluto"*.
Mientras se dispone *"realizarle una rutina aproximadamente de 15 días, a los efectos de analizar sus actividades particulares (fotografías –de la persona, de la familia, de su casa, de su vehículo–)"*, los evaluadores detallan las *"Motivaciones de la persona"*.

"1) Económicas. Económicamente se encuentra muy bien. Tiene casa propia – vehículo propio.
2) Discriminación social. Ninguna.
3) Ideológicas. Hasta donde esta Agencia pudo investigar, (la) *mencionada persona es de ideas democráticas.*
4) Emocionales. Debido al problema con el coronel Ramírez, quiere de algún modo aclarar con las Fuerzas Armadas, para que no lo tilden de izquierdista.
5) Seguridad. A su familia. Tiene temor de que el PCU o el MLN tenga información de que en algún momento fue informante de la embajada de Estados Unidos y del coronel (r) Nelson Costanzo.
6) Aventurismo. Tiene el afán de ser el súper-agente de información.
7) Sexuales. Hasta el momento se desconoce.
8) Vicios. Hasta el momento se desconoce."

Después de la primera entrevista (en realidad la segunda, porque cuando concurría a la sede de la DGID vio *"izquierdistas en la zona"*) se decidió concretar el reclutamiento. *"Es importante la información que nos pueda suministrar ya que el servicio en estos momentos no tiene canales de información en el sector sindical del puerto, a su vez podrá informar sobre actividades de la ultraizquierda ya que la finalidad de su reclutamiento es militar gremialmente en el MLN del SUANP."*

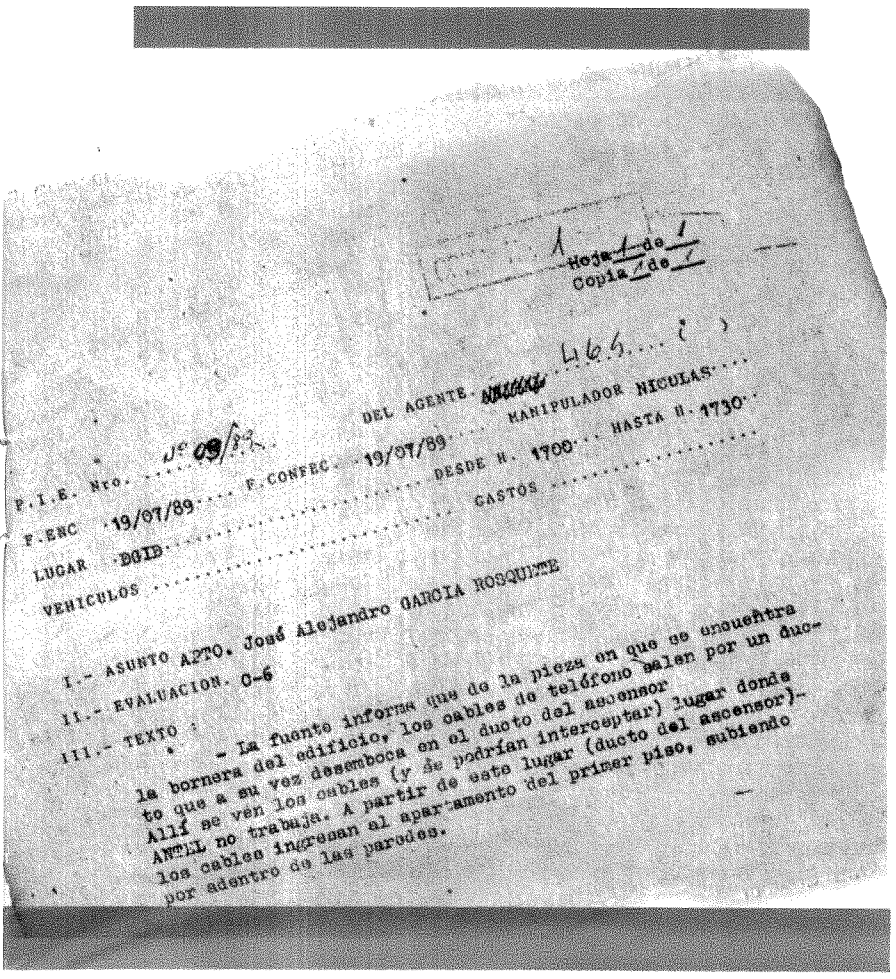
La motivación de la seguridad para su familia pareció ser la determinante, porque, como explicó en la primera entrevista grabada por su manipulador, una vez que concurrió a la casa de la avenida bulevar Artigas del coronel Costanzo (informante también de la embajada estadounidense, aunque no lo aclara explícitamente), a propósito de unas operaciones de contrabando de armas a través del Yatch Club, el hijo, que después supo que era tupamaro, había escuchado la conversación. M logró insertarse en círculos sindicales y llegó a informar sobre la desaparición, en la ANP, de documentación referida a importaciones, afirmando que *"hay políticos entreverados con contrabando"*.

DESDE EL CEREBRO SINDICAL. El interés de la inteligencia militar por la actividad sindical era tan intenso como por la actividad de los partidos políticos, aunque en determinados círculos se entremezclaba, cuando el espionaje se ocupaba del Partido Comunista, del Partido Socialista, del PVP o del MLN. "Leandro", agente 03-E, era un dirigente de Pilsen que participaba en la dirección de la FOEB, primero como secretario de actas y después como secretario de relaciones (internas de la federación, nacionales con otros gremios y con la central obrera). En calidad de tal concurría como delegado alterno al Secretariado Ejecutivo y a la Mesa Representativa de la central; también participaba de instancias de discusión sindical en el Partido Socialista.
Las transcripciones de los contactos entre el agente 03-E y el manipulador "Diego", se centraban principalmente en las conversaciones que "Leandro" mantenía en el sindicato con Antonio Adourian y con Richard Read; y en el PIT-CNT con Lalo Fernández y Carlitos Pereyra, principalmente. El supervisor del manipulador "Diego", quien solía poner indicaciones a mano en los informes, recomendaba al agente "Leandro" estrechar la relación con Read y obtener información sobre el MPP. Read había obtenido la mayoría de votos en la interna del MPP: también reclamaba más detalles sobre el dinero que presuntamente recibió el PIT-CNT de organizaciones suecas e italianas para financiar la campaña por el voto verde, de lo que el agente había informado tras una conversación con Adourian.
De su participación en las instancias de dirección de la central, "Leandro" recogió información sobre el conflicto aceitero, que el PIT resolvió no respaldar; o la opinión de la Mesa Representativa sobre el conflicto en la estiba de Fray Bentos, y sobre las elecciones en AEBU y ANCAP.
La "agencia" estaba particularmente interesada en conocer de antemano la actitud del PIT-CNT para el caso de que el 16 de abril triunfara el voto amarillo en el referéndum por la ley de caducidad. "Leandro" informaba que no había nada previsto (*"hablé con Lalo y Carlitos y no oí nada"*) porque la opinión mayoritaria en la Mesa era que triunfaba el voto verde. Sin embargo, Richard Read se opuso a una pegatina de último momento porque la información que circulaba era que el voto amarillo iba a empapelar Montevideo con 40 mil afiches con pegatineros contratados: *"Puede pasar cualquier cosa"*, advirtió.

La discusión interna en la FOEB sobre la distribución de atribuciones entre los dirigentes, y en particular la representación en el PIT-CNT, provocó la renuncia de Read a la secretaría general. Pero una posterior negociación favoreció a "Leonel" y con ello a la "agencia": *"La gente entendió que era un trabajo de equipo* –dijo "Leonel" a su manipulador– *y que se podía rotar, así que Adounian sigue como presidente y Richard como secretario y son los que se rotan en el PIT; y después algunos otros que hemos estado actuando, el caso mío, el caso de Burgos, de Coca Cola, que son los que más o menos pensamos que podemos seguir actuando. Por ejemplo, anoche fue Richard y Burgos, fui yo y se retiró Richard, quedamos Burgos y yo en la Mesa"*. La infiltración de la central sindical, que había tenido un precedente con el agente 45, en 1987, quedaba asegurada hasta el siguiente congreso del PIT.

Foto: Juanjo Castell

La lista de informes sindicales es extensa en el conjunto de documentos en poder de **Brecha**. Así, el agente 37 informaba periódicamente desde enero de 1987 sobre la interna de la UNTMRA; el agente 03-G proporcionaba solícitamente nombres y direcciones de abonados telefónicos a partir del número de teléfono que se le proporcionaba, al punto que la "agencia" preguntó sobre las posibilidades de obtener una "guía invertida". *"La fuente informa que el tel 534508 pertenece a Manuelita Melgar, Estrázulas 1374/ 904* (...). *La fuente informa: la dirección del tel 987887 corresponde a 18 de Julio 1333, apartamento 306"*. En agosto de 1988 el agente 111 adelantaba los nombres de las nuevas designaciones en las jerarquías de ANCAP; el agente 45-G informaba sobre las elecciones en el sindicato de ANCAP; en AEBU, el agente 71-G informaba sobre actividades sindicales en el BROU; y al cabo del Ejército Daniel Imbriani (que pasó a ser agente 72 G, que trabajaba en la imprenta militar y era delegado de AEBU en la parte de atletismo, manteniendo contactos con Ricardo Piñeyrúa, jefe del departamento deportivo del sindicato, y Juan Telechea, jefe del departamento docente), *"se le recomienda tener posiciones de centroizquierda, estar en contra del gobierno y no esconder que trabaja en la imprenta"*.
El agente 33 elaboraba prolijos informes sobre las tendencias político-ideológicas de los dirigentes y delegados en AUTE; y el agente 61-G tenía en el dirigente Jorge Silvano una fuente privilegiada de datos sobre la interna de la Unión de Trabajadores de Cutcsa (UTC): *"En julio* (del 89) *Silvano le comentó a la fuente que Pepe d'Elía y el presidente Sanguinetti habían llegado a un acuerdo sobre la acción sindical para el resto del año, pero que Sanguinetti rompió el acuerdo al no cumplir con cosas importantes"*. Con caligrafía apresurada, el supervisor estampaba a mano, infructuosamente: *"¿Qué cosas importantes?"*.



Hoja 1 de 1
Copia 1 de 1

P.I.E. Nro. 09/89 DEL AGENTE 46-G

F.ENC 19/07/89 F.CONFEC 19/07/89 MANIPULADOR NICOLAS

LUGAR BOID DESDE H. 1700 HASTA H. 1730

VEHICULOS COSTOS

I.- ASUNTO A2TO. José Alejandro GARCIA ROSQUETE

II.- EVALUACION. C-6

III.- TEXTO :

- La fuente informa que de la pieza en que se encuentra la bornera del edificio, los cables de teléfono salen por un ducto que a su vez desemboca en el ducto del ascensor. Allí se ven los cables (y de podrían interceptar) lugar donde ANTEL no trabaja. A partir de este lugar (ducto del ascensor) los cables ingresan al apartamento del primer piso, subiendo por adentro de las paredes.

LA VIGILANCIADE DIPLOMÁTICOS CUBANOS

SOLDADOS Y PORTEROS

A comienzos de 1988 el pachequista Alberto Iglesias introdujo en la estructura de la inteligencia militar a un conocido que trabajaba en la Intendencia Municipal de Montevideo. Una vez reclutado, su manipulador le encomendó obtener los planos de dos apartamentos, uno en la rambla República del Perú, y otro, lindero, en la calle Scoseria.
El manipulador urgió al nuevo espía, bautizado como agente 78-G, a que obtuviera los planos, pero el espía se disculpó diciendo que los servicios de la IMM estaban alterados después de un conflicto, y que la interpelación al intendente en la Junta Departamental no le dejaba tiempo suficiente.

Para entonces, la agencia estaba embarcada en un espionaje a algunos diplomáticos cubanos establecidos en Montevideo. Esos planos –y otros, de un edificio en avenida Soca y en el edificio Cataré, de la calle Leyenda Patria– servirían para diseñar operativos de allanamiento clandestino y de interferencia de líneas telefónicas. La vigilancia sobre esos domicilios permitía la identificación de personas, algunas de las cuales ya aparecían en un álbum de fotos de la Sección Técnica, con 47 negativos, de cubanos y allegados.

Uno de los objetivos de la agencia era el diplomático José Sebastián Fernández Vilela (número 8930 en el álbum); otro era Luis Arce, periodista, corresponsal de Prensa Latina, cuyas oficinas estaban instaladas en su propio apartamento; y un tercer objetivo era José Alejandro García Rosquete, secretario de la embajada.
De la vigilancia, y eventual allanamiento del domicilio de Fernández Vilela, los documentos de inteligencia en poder de **Brecha** no aportan información detallada. En cambio, la vigilancia a que fue sometida Prensa Latina generó profusión de informes, porque el agente que espiaba la residencia-oficina, el portero del edificio de Soca 1263, registraba cada uno de los visitantes, los identificaba en fotografías o los describía con lujo de detalles; apuntaba los datos de las facturas de ANTEL, registraba las matrículas de los autos y revisaba las bolsas de basura del apartamento de Luis Arce, de las que en ocasiones rescataba algún telex o borradores de cartas.
La misión del portero –agente 64-G– tuvo que sortear el hecho de que sus dos hijos eran soldados y que su esposa solía colgar en el patio interior, a la vista de todos los vecinos del edificio, las prendas militares lavadas. *"En el edificio saben que sus hijos son soldados. Si bien no se sabe que el objetivo tenga conocimiento, se sospecha que sí. En el edificio saben que el agente trabaja para esta agencia los coroneles retirados Alburquerque y Báez. Probablemente también lo sepa el general (r) Alcides R Tamiel"*, consignaba un "comentario" de los manipuladores "Nicolás" y "Claudio" en un informe del 4 de mayo de 1989.

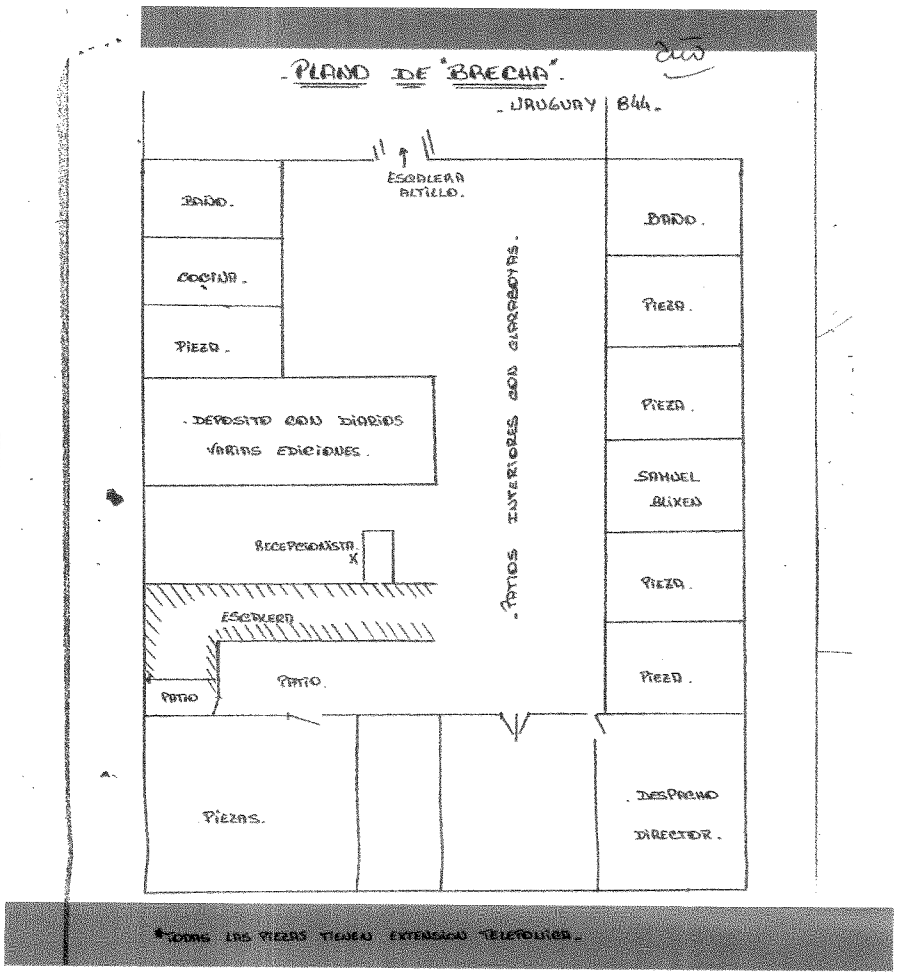
El portero reconoció en el álbum la foto 8926 (*"Amelia Barceló Peirano, que trabaja de mañana junto con otros dos hombres"*) y entre los visitantes las fotos 8907 (*"Mónica Botero"*), 8909 (*"Abelardo Curbelo Patrón"*), 8902 (*"Plácido Fernández Méndez"*), 8940 (*"Ana Silvia López Muslera"*) y 8930, José Sebastián Fernández Vilela. Más tarde el agente confirmó la presencia en el edificio de Soca del secretario García Rosquete, que se movilizaba en el auto matrícula CD 9271, y del embajador de Cuba.
Revisando las facturas de ANTEL, el agente pudo determinar que Prela tenía un gasto de telecomunicaciones de 900 mil pesos mensuales y que se solían hacer llamadas a tres abonados de La Habana. El día que Luis Arce fue transferido a la oficina de Prensa Latina en Perú, el portero, revisando la basura, encontró, rotos, documentos que probaban la permanencia de Arce en Uruguay, firmados por García Rosquete.

Más intensa fue la vigilancia en el edificio Cataré, de la calle Leyenda Patria, donde residían el secretario García Rosquete y su esposa. La agencia tuvo dificultades para reclutar a un espía. Lo más cerca que pudo llegar fue el enganche de un soldado que pudo ser ubicado como portero suplente en el edificio Miramar, contiguo al del objetivo. El agente 46-G recibió instrucciones precisas: *"por razones de disciplina del secreto, compartimentarse absolutamente respecto de todo el ámbito militar, incluso de Wilson"*. Se le ordenaba *"comunicarse telefónicamente con la hermana del mayor Schoeder para mantener suplencias o portería definitiva en el edificio del objetivo"*; y como directivas se le planteaba *"hacer un plano detallado de los bornes del edificio, hacer un plano del cableado, revisar la basura, conseguir las llaves del apartamento"*.

> *El manipulador solicitó un plano exacto del hall y de la pieza donde estaban los bornes*

El agente 46-G intentó un acercamiento con su colega, el portero del edificio Cataré, para un eventual reclutamiento, basándose en información del portero del edificio Miramar, a quien él solía suplantar y que aseguraba que aquél era *"pachequista"*. Cuando pretendió comentar una información de prensa referida a Pacheco Areco, el portero del Cataré no quiso hablar, *"no lo voté y no me interesa"*. No obstante, el agente logró permanecer en el hall del Cataré, viendo un partido Uruguay-México con su colega. Vio entrar al objetivo a las 10 de la noche y pudo establecer que los bornes de las líneas telefónicas del edificio estaban en una pieza, y que los cables salían a un ducto del ascensor antes de ingresar en el primer piso. El agente aconsejaba intervenir las líneas en ese ducto, al que no accedía ANTEL.

El manipulador le solicitó un plano exacto del hall y de la pieza donde estaban los bornes, y del acceso al ducto del ascensor. Y un día en que el agente realizaba una suplencia en el edificio vecino, se le ordenó que permaneciera en la vereda, barriendo, mientras su manipulador, "Nicolás," entraba en el Cataré para fotografiar los bornes.
Los documentos no consignan el final del operativo cuyos detalles muy verosímilmente podrían adjudicarse a uno mucho más reciente: el allanamiento clandestino de las oficinas de los antropólogos forenses. Con una diferencia: si la agencia logró intervenir los teléfonos y entrar en el apartamento del diplomático García Rosquete, seguramente no dejó ninguna pista de su paso por allí, como sí se dejaron en el ingreso al GIAF.



NOS TOCÓ A NOSOTROS EL ESPÍA QUE ENTRÓ EN LA BRECHA

No fuimos (¿somos?) un objetivo exclusivo. Los documentos de la inteligencia militar incautados revelan que algunos medios de prensa y algunos periodistas eran objeto del interés y la curiosidad de los espías uniformados. **Brecha** ya informó sobre el proyectado allanamiento a la redacción del quincenario *Mate Amargo*, a partir de la información que brindaba –hasta donde se sabe en el período marzo-agosto de 1989– un fotógrafo infiltrado, cuyo objetivo era acceder a las computadoras que el MLN mantenía en el local de la redacción. En ese sentido la vigilancia sobre *Mate Amargo* era parte del espionaje más general sobre el MLN, su estructura y sus dirigentes.

Los documentos inducen a pensar que el Departamento III (Operaciones) de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) aprovechaba cualquier oportunidad de infiltrar espías en las redacciones de radios y periódicos; y de establecer lazos con periodistas, ya fuera para espiarlos o para reclutarlos. Hay numerosos partes sobre "fuentes" que ocasionalmente mencionan el apellido de un periodista, y de la trascripción de la conversación surge que el oficial (el manipulador) pregunta invariablemente: ¿tiene problemas económicos?, sin que ello suponga que existan, a priori, indicios de una posible captación. El pago en dinero por información parece ser el recurso más exitoso para el reclutamiento de espías, pero no es el único. También se utiliza la presión sobre hechos del pasado y el chantaje sobre intimidades para obligar a la colaboración.

Porque los periodistas y las redacciones de los diarios eran y son fuentes de permanentes noticias, poner una "oreja" en esos lugares daba sus frutos. En el mecanismo de espionaje desarrollado por la "agencia", ubicar a un informante en el entorno de un dirigente (político o sindical) permitía acceder a pormenores a veces reveladores, a veces sabrosos, sobre todo cuando las opiniones vertidas en confianza ilustraban sobre relaciones políticas o sindicales. A todos los niveles, en distintas organizaciones, parece haber sido un recurso exitoso la facilidad con que el informante lograba convertirse en una persona de confianza. Para ello, o bien exhibía antecedentes de militancia o bien explotaba otros recursos, como por ejemplo la condición de ex preso político.
Así, el informante que espiaba al Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) y puntualmente contaba sobre los temas tratados en la dirección ocasionalmente revelaba que para algunas reuniones con representantes de otras organizaciones los dirigentes del MRO iban armados. La designación del espía para asumir responsabilidades en la publicación partidaria *Los Orientales* fue valorada por los militares de la DGID como un paso trascendente, porque el espía estaba en condiciones de realizar entrevistas a políticos, sindicalistas e incluso visitantes extranjeros, orientando las preguntas en función de los intereses de la inteligencia militar.

La infiltración en la redacción del diario *La Hora*, publicación del Partido Comunista, fue, hasta donde revelan los documentos, un objetivo frustrado. Un informante que aparentemente podía exhibir antecedentes de periodista fue aleccionado por su manipulador para que se ofreciera para colaborar en *La Hora* y en la agencia cubana Prensa Latina. Los registros fotográficos de la inteligencia militar –que se usaban como "catálogos" para identificar personas– incluían las fotos de cuatro periodistas vinculados a Prensa Latina: el corresponsal Luis Arce y los uruguayos Carlos Núñez (también periodista de **Brecha** y de *Mate Amargo*), Ángel Ruocco y Mónica Bottero (periodista de **Brecha** antes de su pase a *Búsqueda*). En todos los casos los manipuladores solicitaban, en la medida de lo posible, planos de las redacciones de diarios y semanarios. La sola mención, por parte de los informantes, de nombres de otros periodistas, motivaba, en las anotaciones a mano de los supervisores, la sugerencia de "estrechar relaciones"; así ocurrió con Nelson Caula (en ese momento redactor de *Guambia*), Alberto Silva y Roger Rodríguez (periodista en **Brecha** y en *La República*).

OTRO "BICHO". En julio de 1988 el oficial de inteligencia que utilizaba el seudónimo "Mauro", se encargó de manipular al agente 35-G, apodado el "Bicho". Mauro tenía ciertas reservas sobre el Bicho, quien en una primera entrevista "escondió" información personal, en conocimiento del manipulador: *"Comentarios personales: con el tiempo se sabrá la veracidad de los informes de este agente. Pienso que no es confiable desde el momento que le pregunté por un amigo en común y me dice que está bien, sabiendo perfectamente que ha finalizado la relación entre ellos"*. El Bicho ofreció como referencias sus antecedentes laborales en UTE y en la Jefatura de Policía de Montevideo, y al subcomisario Enrique Tejiachi.

Pero a los efectos de su contratación pesó el hecho de que el Bicho podía explotar su vínculo de la infancia con Juan Green, un uruguayo esposo de la embajadora sandinista de Nicaragua en Uruguay, Bertha Marenco. El Bicho aprovechó ciertas relaciones familiares para acercarse a Green, a quien le ofreció la posibilidad de entregarle información sobre los "contras", a partir de sus presuntas extendidas relaciones con militares y políticos. Green finalmente accedió a proponer a Managua que el Bicho fuera contratado como informante por 500 dólares mensuales, de modo que pasó a ser un "doble agente", por así decirlo.

Sin embargo, los documentos referidos a los informes del Bicho abarcan otros temas. Por ejemplo: un documento escrito a mano, probablemente a mediados de julio de 1988, ofrecía: *"1) información sobre infiltrados marxistas en la Policía; 2) información sobre grupos nacionalistas anticomunistas; 3) vinculación con Juan Green, esposo de Berta Marenco; 4) contactos con Alberto Silva y Nelson Caula; 5) estudios sobre grupos antimarxistas; 6) marxistas infiltrados en partidos tradicionales; 7) informes sobre atentados; 8) actividades de Stella Maris Zaffaroni Piñón de Blixen, esposa de Samuel Blixen García; 9) contactos con elementos marxistas palestinos; 10) campaña de desprestigio contra oficiales en actividad y en retiro por parte de un capitán retirado"*. A mano se estampó: *"Consultar coronel Ruggiero"*.

Otro informe fechado el 1 de agosto de 1988 detalla que en la parroquia San Antonio (Cufré y Caraguatá) *"los días sábado a la hora 9 se reúne un grupo de reflexión, integrado en su mayoría por PC. En el mencionado grupo se habla de: materialismo, igualdad de las personas, derechos humanos y de la sociedad ideal"* (una flecha dibujada a mano deriva esa información al teniente coronel Bonavoglia). También la fuente informa que el 6 de agosto se realizará una cena en el Clúb Residentes de Lavalleja, a la que *"concurrirán viejos amigos de la fuente del barrio Jacinto Vera, entre ellos Juan Green"*. Y en el subtítulo "Observaciones" se consigna que *"se adjunta el plano de **Brecha**; el mismo fue hecho por la fuente"*.

La solicitud de realizar un plano de la redacción de **Brecha** corresponde a una "orientación" anterior, consignada al final de un informe, fechado el 27 de julio, sobre la entrevista del Bicho con Green en la embajada de Nicaragua: *"Directivas. * Guía inversa, * carné inspección UTE, * plano del local de semanario* **Brecha**, ** lista de principales agitadores en Cutcsa"*. No hay referencias a las razones de cada uno de los pedidos, y en particular al plano de **Brecha** (cuya reproducción se adjunta en esta nota). Es de consignar que el plano es fiel a la distribución de la planta superior, y la única referencia a uno de sus periodistas puede dar indicios de los reales motivos.

MODUS OPERANDI. En los documentos en poder de **Brecha** aparecen varias referencias a la obtención de carnés de organismos oficiales: UTE, ANTEL, IM, Corte Electoral, OSE, etcétera. Con esos carnés, oficiales de la inteligencia militar –en ocasiones en compañía de los informantes– lograban acceso a viviendas y locales, haciéndose pasar por funcionarios públicos. El caso más paradigmático de los consignados en el cuerpo de documentos obtenidos por **Brecha** es el referido a una inspección clandestina masiva en el *block* de apartamentos San Andrés III, de la calle Felipe Sanguinetti 2183, en abril de 1989. Esas y otras acciones tuvieron como objetivo detectar la presencia de ciudadanos argentinos que habían huido de la represión después del intento de copamiento del cuartel de La Tablada, en enero de ese año, en el que murieron 32 guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria. El 24 de abril los oficiales "Mauro" y "Diego" inspeccionaron 42 apartamentos, *"no pudiéndose obtener indicios que amplíen o confirmen la información sobre presuntas personas escapadas de Argentina. De la totalidad de apartamentos no se pudo realizar la inspección en 20 de ellos por no encontrarse sus moradores, aunque se les preguntó sobre sus ocupantes a los vecinos"*. El registro clandestino se efectuó con documentos de OSE, y el resultado fue magro.

Carnés de ANTEL permitieron realizar inspecciones en diferentes apartamentos de Pocitos y Villa Biarritz para ubicar los bornes telefónicos con vistas a realizar interferencias clandestinas en domicilios de diplomáticos y para hacer las manipulaciones en plena calle en las llamadas "centrales de bornes". De la misma forma se obtenían en la Intendencia, mediante colaboradores, planos de edificios que facilitarían el ingreso a algunas residencias. La información para los operativos era resultado de una larga cadena de colaboraciones: obtención de números telefónicos a partir de nombres, obtención de nombres a partir de números telefónicos, identificación de la ubicación del borne de cada abonado, obtención de antecedentes en la Jefatura de Policía, obtención de domicilios en la Intendencia de Montevideo; obtención de vínculos comerciales en el BPS, obtención del nombre del propietario de un vehículo a partir del número de patente; en los hechos, y de forma clandestina, la inteligencia militar obtenía toda aquella información que está restringida para el ciudadano común. En la documentación aparecen elementos que indican la planificación de operativos de interferencia telefónica y de allanamientos: es el caso del local central el Partido Comunista, el local central del MLN, el local central de la Comisión Pro Referéndum, los domicilios de por lo menos dos diplomáticos cubanos, las oficinas de la compañía aérea soviética Aeroflot, la casa de la embajadora nicaragüense, la redacción de **Brecha**, las oficinas de Prensa Latina, la redacción de *Mate Amargo*, entre otros.

Por lo pronto, en lo que se refiere a **Brecha**, otros informes del Bicho aportan sugestivos elementos. El espía que se coló en la redacción del semanario y que con tanta exactitud pudo dibujar el plano de las oficinas estampó la siguiente información en el informe elevado por el manipulador "Mauro": *"La fuente informa que se encontró en la vía pública con Nelson Caula, redactor responsable de* Guambia. *En dicha acción tuvieron una conversación informal y este último le comenta que hay un argentino en Montevideo solicitando información sobre el paradero de Abel Ayala y cartas de Amodio Pérez a Federico Fasano. Esta información es pagada muy bien. Textual: 'Y como sé que vos, petiso, andás por todos lados, capaz podés hacerte algún mango'. A esto la fuente le responde que sí tiene algo lo llama al diario"*. Quizás no sea difícil identificar al "petiso ubicuo" para determinar qué querían los oficiales de inteligencia, y si alguna vez llegaron a entrar en la redacción, más que para sacar, para poner algo.
Puesto que la información en poder de **Brecha** se refiere únicamente a la documentación de informantes, espías e infiltrados manipulados por la inteligencia militar, no es posible establecer cuál fue el resultado de los operativos de interferencias telefónicas, seguimientos y allanamientos propuestos y en qué medida se concretaron. Esas acciones, presumiblemente ejecutadas por el Departamento III (Operaciones) habrán sido encomendadas, en todo caso, a oficiales y personal de la "agencia" que no estaban directamente involucrados en la manipulación de los "agentes". Pero es lícito suponer que los informes sobre esas acciones están debidamente archivados y podrían ser uno de los objetivos de la Comisión Investigadora Parlamentaria –que aún no ha sido formalmente propuesta– para desbrozar la maraña del espionaje militar en democracia.

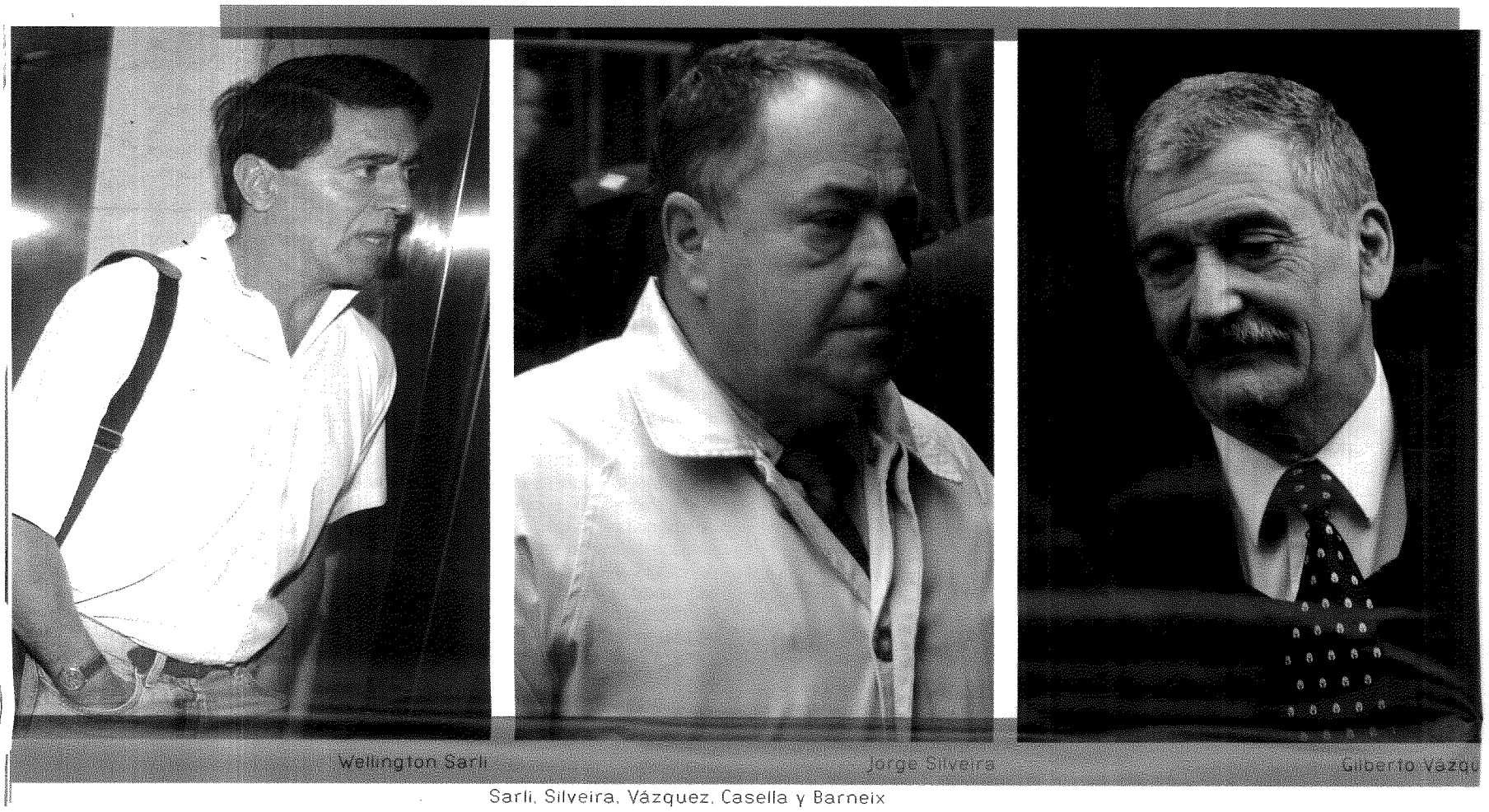
SIMPATIZANTES Y SEDICIOSOS

La forma de operar de la inteligencia militar en el espionaje a las organizaciones populares ha mantenido un idéntico esquema que comenzó a elaborarse antes de la dictadura, se perfeccionó durante el terrorismo de Estado y mantuvo los rasgos esenciales después de la redemocratización: independencia para fijar objetivos, autonomía operativa y utilización de informantes e infiltrados como recurso principal de obtención de información. El mecanismo del espía y el soplón resultaba efectivo para un accionar que se rigió por los conceptos de la Guerra Fría y que en su carácter represivo a militantes y organizaciones de izquierda no requería mayores ajustes de precisión, cuando el universo podía dividirse en dos: sediciosos y demócratas. Esa división faculta, quién sabe por qué, a arremeter contra los sectores "indeseables" de la sociedad, sean éstos "comunistas" o "judíos".

En Uruguay, como en el resto de las dictaduras del Cono Sur, hubo otra manera de determinar quién era el "enemigo": todas aquellas fuerzas que, en defensa de sus propios intereses, podían alterar el "equilibrio del libre mercado", fueran ellas partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales. Para detectar esos *"perturbadores del equilibrio"* sirvieron las redes de espías e infiltrados. El soplón que identificaba para la Policía a los "comunistas" pasó, a comienzos de los años setenta, a trabajar para los militares, antes del golpe. Hoy están apareciendo informes de espías que, esencialmente, no se diferencian de los informes producidos en la nueva democracia por la inteligencia militar. Sólo un soplón podía informar al director del Servicio de Información de Defensa (SID), coronel Ramón Trabal, que *"la señora del señor general Ramagli es simpatizante del Frente Amplio. Antes de las elecciones se sabe que solicitaba la adhesión para dicho grupo político, llamando telefónicamente a la casa de señoras de jefes y oficiales. Por ejemplo, el caso de la señora del general Bentancur"*. Esa ficha, de diciembre de 1971, aparece en los archivos junto con otra, firmada también por Trabal, de abril de 1972: *"consejero de la embajada en España señor Daniel Soto. En su casa se reúne asiduamente un núcleo de uruguayos radicado en España de filiación frenteamplista. En el grupo figuran entre otros Sancho Gracia, español naturalizado uruguayo, de profesión actor, casado con la hija de nuestro embajador en Holanda, Aureliano Aguirre. Castillo, hermano de Rubén Castillo, de Canal 12 y Radio Sarandí. Este elemento y su esposa han desprestigiado al país con sus declaraciones a través de la tevé española"* (...).

La práctica de intervenir el correo y de usar espías para robar o duplicar cartas que llegaban "en mano" se intensificó durante la dictadura. Una carpeta del Servicio de Información de Defensa referida a las actividades de personalidades del Partido Nacional contiene una carta fechada en Londres, en octubre de 1977, firmada por *"Wilson"* (Wilson Ferreira Aldunate) y dirigida a *"Querido amigo"*, con interesantes apreciaciones sobre la reunión del secretario adjunto de Estado para asuntos interamericanos, Terence Todman, y un grupo de dirigentes del Partido Nacional, durante su visita a Montevideo; y algunas advertencias sobre una excesiva expectativa de *"una salida, que sería una entrada"* si no se dan ciertas condiciones básicas.

Una cartilla con instrucciones para una reunión en una estancia de Rocha advertía *"no hacer preguntas en la ruta, y si no logra dar con el sitio, regrese a Montevideo"*. Después de dejar atrás Castillos, el Camino del Indio, el camino a Velázquez y, en un repecho, las ruinas de una casa donde todavía se lee "Almacén San Cono", *"a mano derecha sale un camino vecinal que lo lleva al sitio indicado"*. Se adjuntaba un plano del camino y una hoja transparente, para aplicar sobre el mapa de la Esso, con puntos rojos y celestes, para orientación. Y terminaba: *"Estas hojas, así como los planitos adjuntos, deben ser destruidos totalmente una vez usados"*.
La carpeta contiene, además, la transcripción de una grabación de Wilson Ferreira, enviada desde Estados Unidos; una copia del testimonio de Wilson ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, enviado por el agregado militar general Dardo Grossi; un extendido prontuario con las actividades de Wilson desde 1972 hasta 1984, rotulado "secreto"; y una carta del contralmirante Francisco de Castro, embajador en Estados Unidos, al canciller Juan Carlos Blanco, con declaraciones de Wilson Ferreira a la prensa *"en las que, como es habitual, da nuevas muestras de su histérico resentimiento"*.



Sarli, Silveira, Vázquez, Casella y Barneix

LOS JEFES DEL ESPIONAJE MILITAR: SILVEIRA, VÁZQUEZ, BARNEIX, FERRO, CASELLA Y SARLI

LA INTELIGENCIA DE SIEMPRE

Los oficiales del Ejército que dirigieron el espionaje militar en democracia contra gobernantes, legisladores, magistrados, partidos políticos, sindicalistas y periodistas fueron en su mayoría piezas clave del terrorismo de Estado durante la dictadura y algunos están presos por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad. No sorprende, por tanto, que la actividad de inteligencia militar mantuviera en democracia los mismos criterios ideológicos de la dictadura, signados por la doctrina de la seguridad nacional y el esquema de la Guerra Fría.

Así, en noviembre de 1992 el entonces teniente coronel Jorge "Pajarito" Silveira (actualmente preso) figuraba como *"asesor de los organismos de inteligencia, para lo cual cuenta bajo sus órdenes con informantes de organizaciones subversivas que brindan información del enemigo"*.

Los jefes de dichas reparticiones, algunas dependientes del Estado Mayor del Ejército y otras del Ministerio de Defensa Nacional, no identifican –hasta donde se sabe– qué organizaciones subversivas operaban en el país ni quién era el enemigo que había que controlar; los documentos referidos al espionaje revelan que el "enemigo" eran partidos políticos legales y organizaciones sindicales.

Los presidentes y los ministros de Defensa de los sucesivos gobiernos desde la reimplantación democrática, en 1985, y hasta 2005, no modificaron el esquema de la inteligencia militar, que proyectaba a la democracia los criterios de la dictadura; es posible que dichos responsables civiles ni siquiera tuvieran conocimiento del grado de autonomía que se desplegaba a sus espaldas. Pero el esquema no se modificó cuando algunos episodios puntuales (el secuestro del chileno Eugenio Berríos en colaboración con la inteligencia chilena en 1991-1992, las escuchas con micrófonos en el despacho del general Fernán Amado en 1993 o las interferencias telefónicas al prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa y al diputado Jorge Barrera en 2002) revelaron la gravedad de esa autonomía.

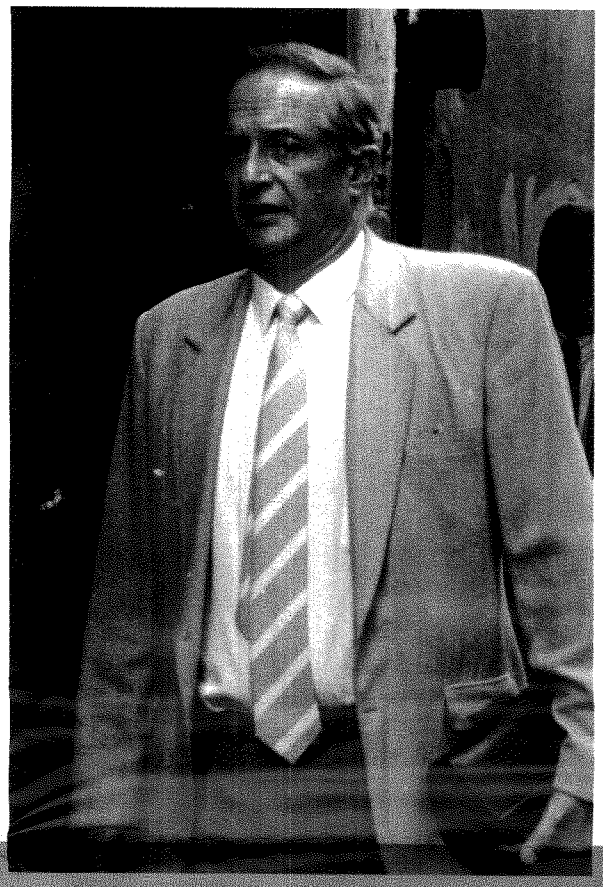
Aquellos oficiales que se destacaron en los organismos represivos como el Servicio de Información de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) fueron después designados como jefes de las reparticiones que se especializaron en el reclutamiento de informantes y en la infiltración de partidos políticos y sindicatos.

Aunque el organigrama de las Fuerzas Armadas y su evolución es difícil de determinar, puede afirmarse que el SID ya tenía en 1984 una sección Reclutamiento e Infiltración (REL) que funcionaba con el Departamento III-Planes, Operaciones y Enlace (POE). En esa época el responsable del POE era el teniente coronel Ícaro N Méndez.

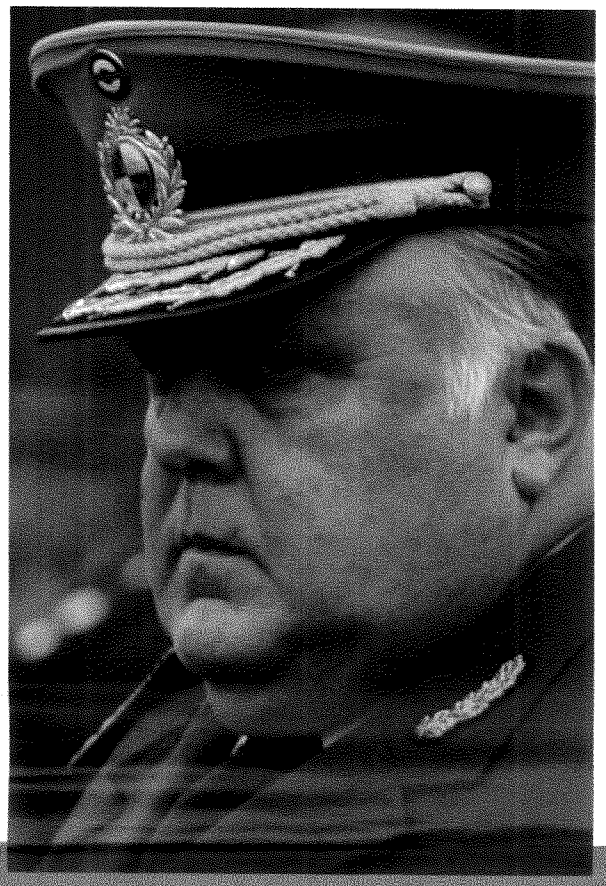
En diciembre de 1984, ya con el resultado electoral, la sección Reclutamiento e Infiltración se transforma en "Anexo" del Departamento III, y su responsable fue el teniente coronel Ramón Larrosa. El término "Anexo" figura como identificación en muchos documentos de 1985 a 1987, en poder de **Brecha**, que se refieren al espionaje de partidos políticos.

Simultáneamente, el SID, creado en 1973 y cuyo primer jefe fue el coronel Ramón Trabal, se transformó en enero de 1985, en los estertores

de la presidencia de Gregorio Álvarez, en el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFFAA), apenas un cambio de nombre, salvo una particularidad: a diferencia del SID, el SIFFAA pasaba a depender de la estructura jerárquica del Ejército, y su control se volvía más dificultoso, para el caso de que los primeros ministros de Defensa de Julio María



Tomás Casella



Pedro Barneix

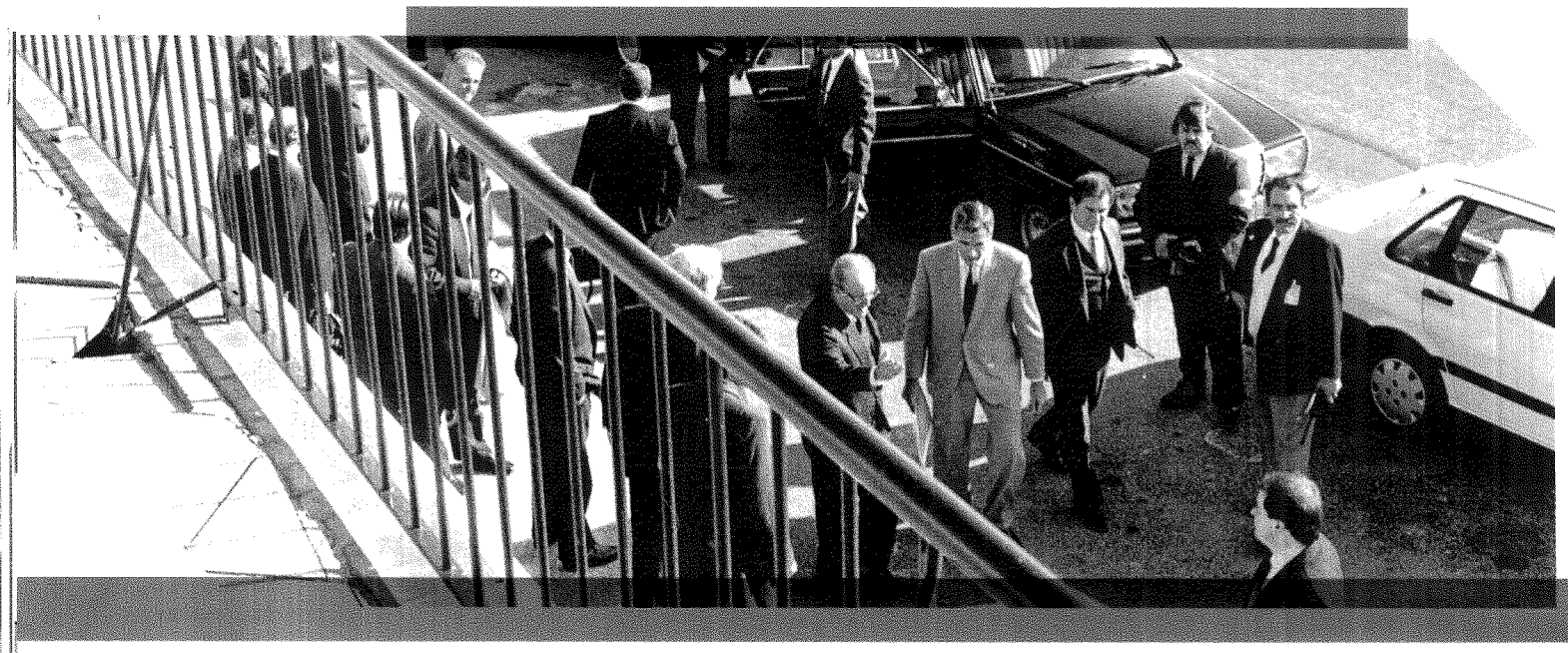
Sanguinetti –el abogado Juan Vicente Chiarino y el general Hugo Medina– tuvieran intención de ejercer el control.
El SIFFAA fue la cabeza visible de la inteligencia militar entre enero de 1985 y marzo de 1987. Al frente del Departamento III (POE), el teniente coronel Pedro Barneix sustituyó al teniente coronel Larrosa en abril de 1986. Ya como general, Barneix ascendería a jefe de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) y en 2005 sería designado, junto con el general Carlos Díaz, para evacuar el pedido del presidente Tabaré Vázquez de identificar los lugares de enterramiento de detenidos-desaparecidos. Después de investigar en el círculo de los más notorios terroristas de Estado, Barneix y Díaz elevaron un informe al comandante del Ejército, general Ángel Bertolotti, con información absolutamente falsa. Por entonces aún no había comenzado la investigación judicial que identificó al entonces teniente Barneix, en 1974, como uno de los asesinos del militante carmelitano Aldo Perrini, ocurrido en el cuartel de Colonia.

SERVICIOS CAPACITADOS. En 1986, como jefe del Departamento III, el teniente coronel Barneix supervisaba al jefe de de la Sección REL, que a lo largo de ese año comenzó el montaje de una red de espías que se enfocaría en la penetración del Partido Comunista. La red estaba supervisada por el capitán Wellington Sarli, quien en enero de 1986 participó en un curso de inteligencia en Alemania.
Sarli cobraría notoriedad diez años después, en 1996, cuando la policía chilena lo identificó como uno de los oficiales uruguayos responsables de la desaparición del bioquímico Eugenio Berríos, y procuró su extradición (véase recuadro). Pero a la hora de dirigir la compañía de espías contaba con un inestimable antecedente: designado en 1975 como miembro del OCOA en la Región 4, Sarli asistió al jefe de la región, el general Gregorio Álvarez, en el montaje de una operación de inteligencia contra 25 jóvenes menores de edad, miembros de la Juventud Comunista en Treinta y Tres. Los jóvenes habían participado en un campamento en una playa de Rocha y a su regreso fueron detenidos en el cuartel de la compañía de Infantería número 10 (donde Sarli revistaba como alférez). Fueron brutalmente torturados y sometidos al escarnio público al difundirse un infame comunicado de las Fuerzas Armadas que falsamente atribuía a los menores de edad prácticas de promiscuidad sexual en el campamento y especialmente acusaba a las mujeres de realizar concursos de resistencia sexual. El periodista Mauricio Almada detalló el episodio en su libro **Crónica de una infamia**. Sarli fue denunciado en un expediente sobre esas torturas, pero el caso no prosperó, aunque no está archivado.

En abril de 1986, quizás por el arresto a rigor que sufrió por "deformación profesional" ordenado directamente por el general Washington Varela, jefe del SIFFAA, el capitán Sarli dejó la sección REL del Departamento III y pasó a revistar en la Región de Ejército 4.
En 1987 Barneix fue sustituido al frente del Departamento III por el teniente coronel Diego M Cardozo, quien mantuvo las mismas funciones de inteligencia por más que el SIFFAA se convirtió, en marzo de 1987, en la Dirección General de Información de Defensa (DGID). El encargado de la Sección REL era el capitán Robert Terra, quien suspendió temporalmente el monitoreo del espionaje para asistir en Taiwán a un curso sobre "Estudios de seguridad e inteligencia". Terra había sido comandante del Grupo de Operaciones Especiales de Inteligencia en el OCOA 2 (San José).
Es a comienzos de ese año que el Departamento III despliega un cerco de espionaje en torno a Wilson Ferreira Aldunate. Los espías infiltrados en el Partido Nacional dan cuenta de las opiniones de Wilson sobre el anunciado referéndum para eliminar la recién votada ley de caducidad, sus evaluaciones sobre el MLN-Tupamaros, y hacen un seguimiento estrecho de Juan Raúl Ferreira y de Diego Achard.
En 1988 el Departamento III de la DGID cobra impulso en la ramificación del espionaje, centrándose en el MLN, en el Partido Comunista y en el PIT-CNT. Su jefe era el teniente coronel Eduardo Ferro, sindicado (pero nunca confirmado) como autor material de la muerte del escribano Fernando Miranda, uno de los pocos desaparecidos cuyos restos pudieron ser rescatados. Ferro fue un activo participante en la red Cóndor: en abril de 1977, como integrante de la Compañía de Contrainformación del Ejército, fue individualizado como uno de los militares uruguayos que interrogaron en el centro clandestino argentino Club Atlético a los desaparecidos uruguayos Andrés Bellizzi y Jorge Goncálvez; en 1978 participó en el secuestro y traslado desde Brasil de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez. Muy probablemente Ferro sea "Guillermo", el incansable coordinador de los "manipuladores" de espías, que en 1989 pretendían allanar los domicilios de diplomáticos cubanos y los locales de las publicaciones **Brecha** y *Mate Amargo*.
En ese mismo año de 1989 el mayor Wellington Sarli asumió como jefe de la sección Manipulación y Reclutamiento de la Compañía de Contrainformación; es posible que tanto esta compañía como el Departamento III de la DGID tuvieran sus propios ejércitos de espías, aunque también es posible que ambos organismos coordinaran el espionaje, porque muchos documentos del D-III señalan que se debía enviar copias a la Compañía de Contrainformación. En todo caso, en 1991 el mayor Sarli fue evaluado por su superior en la Compañía de Contrainformación, el teniente coronel Tomás Casella. A fines de ese año la compañía se hizo cargo de la custodia del bioquímico chileno Eugenio Berríos.

En noviembre de 1992, cuando Berríos, recluido en un chalé de Las Toscas, pretendió fugarse de sus carceleros uruguayos y chilenos, el jefe de la Compañía de Contrainformación era el teniente coronel Edgardo da Cunha, quien dependía directamente del jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, el coronel Gilberto Vázquez, hoy preso por numerosos crímenes de lesa humanidad. Por primera vez el nombre de Vázquez se asocia al episodio del secuestro, desaparición y asesinato de Berríos.

Fue en noviembre de 1992 que Jorge Silveira asumió como asesor de los órganos de inteligencia, es decir, la DGID y la Compañía de Contrainformación. Antes del episodio de Berríos, a mediados de 1992, Wellington Sarli asistió a un curso de inteligencia brindado por la CIA, acumulando el conocimiento adquirido diez años antes en un curso brindado por el MOSSAD, la inteligencia israelí.
Cualquiera de los oficiales nombrados podría aportar testimonios a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza el espionaje militar en democracia, que algunos dudan que fuera una actividad institucional, mientras que otros prefieren dar un paso al costado porque el asunto está "bajo secreto presumarial". El secreto es precisamente lo que fomenta el espionaje.



Llegada al aeropuerto de Carrasco de la delegación española encargada del interrogatorio de los vascos detenidos en 1992. Foto: Jorge Ameal

SOBORNOS POLICIALES PARA VIGILAR A LOS VASCOS EN 1989

OPERACIÓN ETA

En la cúspide de su arbitrariedad prepotente, hija de una actitud que después lo llevaría a la cárcel, Rafael Vera, niño mimado del Partido Socialista Obrero Español, desembarcó su arrogancia en Montevideo, un día de julio de 1989, en su calidad de secretario de Estado de seguridad del gobierno de España. Traía unos videos y muchas pesetas.

La "seguridad nacional" en España pasaba entonces por Argelia, donde sucesivas rondas de negociaciones entre el Estado español y representantes de ETA, la organización independentista vasca, fracasaban invariablemente porque el PSOE no tenía voluntad política para la paz. Tanto las negociaciones como la represión eran contrapuntos en una estrategia de Felipe González, llamado socialista.

A mediados de 1989 la política "antiterrorista" tenía dos vertientes: la directamente terrorista, impulsada en el sur de Francia por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que en realidad eran escuadras parapoliciales financiadas y sostenidas directamente por Rafael Vera; y las presiones internacionales para obligar a gobiernos latinoamericanos a expulsar de sus territorios a ciudadanos vascos exiliados, no importaba cuál fuera el grado de asociación con ETA o el tiempo que hubiere transcurrido. El objetivo era crear una conmoción política.

Los mecanismos de presión podían ser variados; en Uruguay funcionaron mediante el soborno. La misión de Vera era desbaratar una especie de *statu quo* que protegía a unos 15 ciudadanos vascos afincados en Uruguay, a donde habían llegado con documentación falsa, huyendo de la inteligencia española y la persecución de los GAL.

Identificados a partir de informes de espías e infiltrados de la contrainformación militar, la División Planeamiento, Operaciones y Enlaces (POE), del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (DGID), llegó a un acuerdo con los exiliados: mientras no intervinieran en asuntos internos de Uruguay, y se dedicaran exclusivamente a trabajar para vivir, se haría la vista gorda sobre la documentación que habían obtenido mediante una "inscripción tardía". De hecho, tenían documentos auténticos, pero sus nombres y apellidos eran falsos, inventados; la documentación falsa-real incluía a hombres, mujeres y niños. El acuerdo entre la inteligencia militar uruguaya y los refugiados vascos funcionó hasta mayo de 1992, pero éstos estuvieron sometidos a una estricta vigilancia.

"FABRICIO". Para los manipuladores del espionaje militar era "Fabricio"; para los presos que trabajaban en la cocina del Establecimiento Militar de Reclusión número 1 era el "Zapa". En marzo de 1989 Fabricio informaba a "Diego" sobre asuntos varios con credibilidad diversa: sobre el MLN daba cuenta de la enfermedad terminal de Raúl Sendic o sobre la opinión interna de la crisis en el Frente Amplio provocada por el retiro de Hugo Batalla, era su esposa, Cora, la fuente principal; también intentaba infiltrarse en la imprenta Unión, que según la inteligencia militar *"es del MLN"*. Un alto integrante de la Unión Colorada y Batllista le comentaba las maniobras de soborno de un grupo de policías vinculados a un distribuidor de diarios y revistas conocido como "Cachete" y a un vendedor de autos usados *"que tienen comisarios, subcomisarios y jueces vinculados por irregularidades económicas"*. Y su vinculación en calidad de "socio" con otra imprenta, Alfagraf, propiedad de Hebert Mejías Collazo, uno de los fundadores del MLN, le permitió a Fabricio tomar contacto con Xavier Gómez, el "Vasco", quien durante un tiempo trabajó allí como operario de la máquina propiedad de Fabricio.

El denominado agente 05-E conocía a dos vascos, Xavier y Jesús. Este último, que vivía con otras dos mujeres, a las que nunca había visto, en una dirección que aún no había podido averiguar, como tampoco la dirección de la novia de Xavier, en Punta Carretas. Sabía que había otros vascos refugiados en el país y se aguardaba la llegada de una pareja en tránsito en Brasil, que Fabricio se ofreció para alojar en su casa.

Fabricio consideraba que todos esos ciudadanos vascos eran de la ETA, por lo que el jefe del manipulador Diego anotaba en los informes las siguientes directivas: *"Priorizar el tema contactos con el MLN. Profundizar tema de los vascos y la ETA"*.

Una conversación grabada entre Diego y Fabricio detallaba la visita del espía a la casa de Xavier, que a mediados de marzo se había concentrado en sus estudios en la Facultad de Medicina y en las prácticas que realizaba en el décimo piso del Hospital de Clínicas, porque el restorán que varios vascos estaban instalando en la calle Guayabos no podía inaugurarse por falta de dinero. Xavier le había comentado que estaban por recibir dinero desde España y que circulaba la información de un acuerdo entre el gobierno español y la ETA, que les permitiría regresar. En sus encuentros en la imprenta, Fabricio le tiró de la lengua a Xavier, y sumado a lo que le había contado Mejías, pudo reconstruir una historia que luego relató a Diego y a "Elbio", un funcionario de la Dirección de Información e Inteligencia de la Policía. Según Fabricio, Xavier había participado en un atentado contra una central termoeléctrica en España y después se había refugiado en Nicaragua, donde ofició de médico en el frente sandinista en lucha con los "contras"; al parecer, Xavier salvó la vida de una niña operándola a la luz de un farol de manti-

lla. De Nicaragua pasó a México y de allí a Francia, donde conoció a Mejías Collazo y decidió recalar en Uruguay.

GENTE DE LA ETA. Por las mismas fechas, un infiltrado –que en el archivo del Departamento III era identificado como agente 48-G– informaba a la inteligencia militar sobre las actividades de *"gente de la ETA"* en Punta del Este. La fuente del agente 48-G era un pintoresco personaje de Maldonado, Walter Bo, que decía ser experto en tiro, asesor de agencias de inteligencia extranjeras, ex custodia del ex presidente Jorge Pacheco Areco, participante en el asedio del edificio Liberaij, donde murieron varios pistoleros argentinos en 1965, agente de la CIA e instructor de las Fuerzas Armadas. (Cuando murió, en 2013, y se dispuso la sucesión, los alguaciles judiciales que realizaron el inventario de sus bienes encontraron en una caja fuerte de su domicilio del barrio Aparicio Saravia dos fusiles de asalto, un AR 15 y un AK 47, pistolas, revólveres y miles de municiones). Según Bo, *"gente de la ETA habría comprado un chalet en la parada 24"*. Y otro informante del agente 48-G aseguró que la ETA estaba lavando dinero a través de una inmobiliaria cuyo dueño acababa de regresar de España. En el informe de 48-G se consignaba también que otro informante, un joven de 16 años, aseguraba haber visto a cuatro españoles que bajaron de un auto de matrícula argentina estacionado frente al local de pastas La Carmela; y el joven dijo haber visto en el asiento posterior del auto una metralleta *"que por la descripción podría ser una Uzzi"*. Por fotos que se le mostraron, el informante identificó a uno de los cuatro españoles como Xavier Gómez, pero el manipulador Diego acotó en el informe que *"se debe tener cuidado, ya que puede haberse inducido a la fuente cuando reconoció a Xavier Gómez"*.

En mayo de 1989 Fabricio tuvo una trifulca con su esposa, *"por cuestiones políticas"*, y decidió irse a Buenos Aires. Según su manipulador, estaba en negocios ilegales, particularmente en la venta de autos robados, ingresados a Uruguay. Los responsables del espionaje militar estimaron que esas actividades podían ser beneficiosas cuando hubiera que encargarle *"algún trabajo sucio"*. El Departamento III resolvió estrechar la vigilancia sobre algunas viviendas detectadas, sobre el restorán Bora Bora y más tarde sobre otro restorán, La Trainera, que llegaría a tener un gran éxito de público. El 25 de julio, un policía que trabajaba en la inteligencia policial y que el Departamento III identificaba como "Fabián", agente 53-G, entregaba al manipulador Diego *"un documento (incompleto) obtenido por la fuente sobre trabajo realizado a integrantes de la ETA en nuestro país. Según Fabián este trabajo sería para la CIA y de él tendrían conocimiento los oficiales Del Rivero, Moll y Panizzolo. SE RECOMIENDA SÓLO USO INTERNO. En la parte de atrás del documento estaba escrita la matrícula 182 012 (la fuente desconoce si tiene relación al documento) de un auto que tenía una antena para radio. Consultada Policía de Tránsito: matrícula 182 012. Marca: Opel 2.0 (color blanco y negro, cuatro puertas, año 78). Prop: María Ferreyra. Dom: avenida Rivera 4115 (según Guía: Roberto Piñeyro, tel: 59 05 77)"*. Los funcionarios mencionados en el informe PIE 23/89 eran todos jerarcas de la DNII; se acotaba: *"Tener en cuenta para futuras entrevistas lo que se hable sobre el oficial Del Rivero, para no meter la pata"*.

Represión en las inmediaciones del hospital Filtro, 1994. Foto: G. García. Archivo.

POLICÍAS A SUELDO. Una confirmación de que las negociaciones entre ETA y Madrid habían fracasado fue el motivo de la visita de Rafael Vera a Montevideo: concretar personalmente el contenido del Tratado de Extradición entre ambos estados, vigente desde 1885. El gobierno de Felipe González estaba al tanto de la presencia de etarras en Montevideo, y es de suponer que también lo estaba el gobierno uruguayo. Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos. A Uruguay le llegaría el turno después de que México expulsara a un etarra y Venezuela hiciera lo propio.

"La DNII está interesada en retomar el contacto con Fabricio por su amistad con Xavier Gómez, habiéndosele ofrecido pagarle un sueldo de 50 mil nuevos pesos mensuales. De acuerdo a comentarios de Elbio habría disponible para pagarle un sueldo de 300 dólares. De acuerdo a lo expresado, hay bastante dinero para volcar en la operación de ETA." Así consignaba el manipulador Diego, en el informe PIE 11/89 del 21 de agosto, la información brindada por el informante policial.

Al parecer, Elbio y Fabián, ambos policías, estaban compartimentados respecto de su calidad de informantes de la inteligencia militar. El 8 de agosto, Fabián había recibido la directiva (y así lo había trasmitido) de averiguar las actividades del presbítero José María Elorzaga Ugarte, y vigilar la Iglesia lateranense, en el entendido de que el religioso *"recibía el dinero para las actividades de la ETA en nuestro país"*. Según Fabián, *"se volcaron todos los medios a esta operación (Operación ETA), porque hay un importante aliciente económico de parte de los españoles. Esto ha creado discusiones a nivel del personal ya que no hay acuerdo entre quienes se reparte las cantidades disponibles"*. El grueso del dinero de la "donación" de Rafael Vera se repartiría entre *"Panizzolo, Moll, Del Rivero, Telechea, la señora de Del Rivero (mecanógrafa)"* y algo entre *"los 12 integrantes de los grupos operativos (tres grupos de cuatro cada uno)"*.

El documento parcial que Fabián entregó a Diego contenía material en 15 carpetas numeradas, con reproducciones de los pasaportes de 15 ciudadanos vascos radicados en Uruguay, más una información sobre el presbítero Elorzaga. La información militar revelaba que en julio de 1989 ya estaba armada la trampa: esos 15 serían todos apresados en mayo de 1992. En la conversación de agosto de 1989, el policía le explicó al militar que las 15 carpetas eran originales, por lo que, aunque no lo sabía, presumía que había funcionarios españoles estacionados en Uruguay. Fabián explicó que todo aquel dinero era *"guita extra"* y que hubo un *"gran puterío"* por el reparto, *"son 13 sueldos y agregale un viaje de tanto en tanto para un jefe de grupo"*. Diego no entendía lo de "dinero extra", de modo que Fabián explicó: el "combo" recibía permanentemente un sueldo de la CIA que permitía completar, en total, un sueldo y medio, y ahora se sumaba el dinero de la inteligencia española.

Algo de ese dinero recibiría Fabricio, el preso devenido informante. En una entrevista que el militar Diego y el policía Elbio mantuvieron con Fabricio, se sugirió la posibilidad de que Xavier Gómez fuera la punta de toda la organización ETA en Uruguay. Esa presunción impulsó a Elbio a proponerle a Fabricio un sueldo de 50 mil pesos si lograba estrechar sus vínculos con el Vasco. *"¿Cuánto querés ganar?"*, preguntó, y ahí comenzó un regateo que iba de dólares a pesos. Elbio propuso que Fabricio invitara a Xavier a comer un asado en su casa, en el que él estaría presente.

"—¿Vos querés que yo te haga amigo a vos con él?

—Seguro.

—Loco, inventá bien quién sos, de dónde te conozco...

—Yo ya tengo el verso hecho: me conocés de la militancia antes del 73.

—Te conozco de... De la micro no te puedo conocer, supongo. ¿O sí?

—Yo soy un anarco, un loco de la guerra...

—El único problema es que, por una puta casualidad, alguien de la micro hable con Xavier... Está bien, podés adquirir otra personalidad... como había compartimentación..."

Las elecciones de noviembre de 1989 implicaron, para la inteligencia española, repetir el entretejido de sobornos a fin de actualizar el "operativo ETA". El 8 de abril de 1992, el presidente Luis Alberto Lacalle llegó de visita a España, donde firmó un acuerdo por el cual el gobierno de Felipe González le concedía a Uruguay un crédito superior a los 30.000 millones de pesetas, unos 300 millones de dólares. Cinco semanas después, el 15 de mayo, la Policía irrumpió en el local del restaurante La Trainera y en sucesivos allanamientos en siete viviendas detuvo a 30 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Dos días después, 13 ciudadanos vascos eran procesados, y en los calabozos de la DNII eran interrogados por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes.

En una entrevista concedida al diario español *El Mundo*, el presidente Lacalle explicó que la tradición uruguaya de asilo *"debe confrontarse con la moderna doctrina del derecho internacional que ha excluido del asilo político a los delitos que tengan que ver con el terrorismo. Las relaciones entre España y Uruguay atraviesan por su mejor momento"*. El periodista preguntó si había influido el arresto de los presuntos etarras. *"No, no lo creo. Las relaciones con España siempre fueron buenas. Ahora tenemos una sintonía muy grande que se reveló en el viaje de abril. El 21 de julio vamos a firmar un acuerdo de asistencia financiera muy importante para la reconversión de la industria en Uruguay. España va a dar créditos elevados y en muy buenas condiciones."*

Empero, la extradición de los etarras se demoró dos años, las presiones españolas y su desvergonzada intervención en asuntos internos uruguayos impulsó un vasto sentimiento popular de solidaridad. El "mejor momento" de las relaciones entre España y Uruguay bien valían la brutalidad de la represión en las inmediaciones del Filtro y la muerte de dos uruguayos, para sacar de ese hospital a las apuradas a los vascos y subirlos a un avión español que aguardaba en Carrasco, esa noche del 24 de agosto de 1994.

Ilustración: Fermín Hontou (Ombú)

ESTA PUBLICACIÓN FUE POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE:

Fundación Vivian Trías
Observatorio Luz Ibarburu
Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT
Fundación Friedrich Ebert Uruguay FESUR

SUPLEMENTO ESPECIAL DEL SEMANARIO BRECHA.

Investigación y textos: Samuel Blixen. Coordinación: Rosario Touriño.
Producción ejecutiva: Juan Manuel Chaves. Edición fotográfica: Alejandro Arigón.
Diseño: Alex Gerontakis. Impresión: Gráfica Mosca. (Depósito legal 371.239).

Consejo de Redacción de Brecha: Rosario Touriño (Dirección), Lourdes Rodríguez (Política), Daniel Gatti (Mundo), María José Santacreu (Cultura), Mariana Contreras (Sociedad) y Alejandro Arigón (Fotografía).
Comisión Directiva: Pablo Azzarini, Víctor Abelando y Sebastián Pastorino.

FEBRERO 2017

Brecha